



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

46ª REUNIÓN — 22ª SESIÓN ORDINARIA — 11 DE SEPTIEMBRE DE 1996

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor CARLOS F. RUCKAUF

y del señor vicepresidente del Honorable Senado, doctor ANTONIO CAFIERO

Secretaria: doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretarios: señor MARIO L. PONTAQUARTO, doctor DONALDO A. DIB
y señor RICARDO WILLIAMS PALACIOS

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
ALASINO, Augusto
ALMIRÓN, Carlos H.
AVELÍN, Alfredo
BAUM, Daniel
BAUZA, Eduardo
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRANDA, Ricardo A.
BRAVO, Leopoldo
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CANTARERO, Emilio M.
COSTANZO, Remo J.
DE LA ROSA, Carlos L.
DE LA SOTA, José M.
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
FIGUEROA, José O.
GAGLIARDI, Edgardo J.
GALVÁN, Raúl A.
GENOUD, José
GIOJA, José L.
LEÓN, Luis A.
LÓPEZ, Alcides H.
LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MANFREDOTTI, Carlos
MARANGUELLO, Pedro C.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge
MAYA, Héctor M.
MELGAREJO, Juan I.
MENECHINI, Javier R.
MIRANDA, Julio
MOREAU, Leopoldo R. G.
OUDÍN, Ernesto R.

OYARZÚN, Juan C.
PARDO, Angel F.
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.
PRETO, Ruggero
QUINZIO, Bernardo P.
REUTEMANN, Carlos A.
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
SÁEZ, José M.
SALA, Osvaldo R.
SALUM, Humberto F.
SAPAG, Felipe R.
SOLANA, Jorge D.
STORANI, Conrado H.
TELL, Alberto M.
ULLOA, Roberto Augusto
USANDIZAGA, Horacio
VACA, Eduardo P.
VAQUIR, Omar M.
VERNA, Carlos A.
VILLARROEL, Pedro G.
VILLAVERDE, Jorge A.
YOMA, Jorge R.
ZALAZAR, Horacio A.

AUSENTES, CON AVISO:

AGÚNDEZ, Jorge A.
FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela
HUMADA, Julio C.
MAGLIETTI, Alberto Ramón

EN COMISION:

MENEM, Eduardo
SAN MILLÁN, Julio A.

POR SUSPENSION:

ANGELOZ, Eduardo C.

clara de interés para el Honorable Senado la Celebración del Primer Congreso de Comunicadores Católicos a realizarse en Mar del Plata, Buenos Aires (S.-1.776/96). (Pág. 5025.)

- LXX. Proyecto de comunicación del señor senador Avelín por el que se solicitan informes sobre diversos puntos relacionados con el costo fiscal de la promoción del turismo en la Argentina (S.-1.777/96). (Pág. 5026.)
- LXXI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita un subsidio para el Colegio Secundario Jorge Luis Borges, departamento de Chimbás, San Juan, para la adquisición de mobiliario (S.-1.778/96). (Pág. 5027.)
- LXXII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita un subsidio para el Centro Integrado de Jubilados y Pensionados Nacionales de San Juan, destinado a la adquisición de un electrocardiógrafo y la refacción de la sede social (S.-1.779/96). (Pág. 5027.)
- LXXIII. Proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris por el que se solicitan informes sobre el transporte en un tren de carga de más de un millón de litros de nafta desde Plaza Huincul, Neuquén, hasta la destilería que YPF posee en la ciudad de La Plata (S.-1.780/96). (Pág. 5028.)
- LXXIV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el se solicitan informes sobre la aparición en Córdoba de la bacteria streptococo beta hemolítica denominada "bacteria asesina" (S.-1.781/96). (Pág. 5028.)
- LXXV. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se establece un régimen sobre delitos informáticos (S.-1.782/96). (Pág. 5029.)
- LXXVI. Proyecto de comunicación del señor senador Usandizaga por el que se solicitan informes sobre la instrumentación por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación de un programa de apoyo a deportistas discapacitados (S.-1.783/96). (Pág. 5030.)
- LXXVII. Proyecto de comunicación del señor senador Ludueña por el que se solicita asistencia para culminación del proyecto de investigación y extensión productiva en comunidades aborígenes denominado "Plan Experimental para el Aprovechamiento Sustentable del Loro Hablador en el Norte Argentino" (S.-1.784/96). (Pág. 5030.)

LXXVIII. Proyecto de comunicación del señor senador Salum por el que se solicita la remisión al gobierno de Jujuy de los fondos para el mantenimiento de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional "Horacio Guzmán" (S.-1.785/96). (Pág. 5032.)

LXXIX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Peña de Lopez y otros señores senadores por el que se solicita se declare el día 23 de septiembre de cada año como "Día Nacional contra la Explotación Sexual de los Niños" (S.-1.786/96). (Pág. 5032.)

LXXX. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se declara de interés para el Honorable Senado la realización de la Jornada de Presentación del Programa de Acción elaborado en el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, organizada por el Consejo Nacional del Menor y la Familia (S.-1.787/96). (Pág. 5033.)

5. Lectura y aprobación, con modificaciones, del plan de labor para la sesión de la fecha. (Pág. 5034.)
6. Por indicación de la Presidencia se pasa a un cuarto intermedio para constituir el cuerpo en tribunal de juicio político. (Pág. 5037.)
7. Consideración de un proyecto de resolución por el que el Honorable Senado de la Nación se constituye en tribunal de juicio político para juzgar la conducta del doctor Francisco Miguel Angel Trovato (S.-1.789/96) se aprueba con modificaciones (Pág. 5037.)
8. Por indicación de la Presidencia se pasa a un cuarto intermedio para constituir el cuerpo en tribunal de juicio político (Pág. 5043.)
9. Lectura de la resolución aprobada en sesión secreta correspondiente al juicio político seguido al doctor Gerardo Walter Rodríguez (Pág. 5043.)
10. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio Intergubernamental entre la República Argentina y la República Federal de Alemania sobre los Colegios Argentino-Germanos (P.E.-473/96). Se aprueba (Pág. 5043.)
11. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se prorroga el plazo de cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario asumidas por las provincias signatarias del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento (P.E.-452/96). Se aprueba con modificaciones. (Pág. 5047.)
12. Apéndice:
 - I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 5084.)
 - II. Inserción. (Pág. 5085.)

pública Federal de Alemania, permitirá contar con un instrumento jurídico adecuado para fomentar la amistad y la comunidad de ideas con respecto a los valores espirituales y culturales, en especial la dignidad del hombre, la tolerancia y el respeto de la religión y convicciones del prójimo, que deben transmitirse especialmente mediante la enseñanza escolar.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

CARLOS S. MENEM.

Jorge A. Rodríguez. — Guido Di Tella.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

II

PRORROGA DEL PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se prorroga el plazo de cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario asumidas por las provincias signatarias del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. (Orden del Día N° 1.056.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Pontaquarto). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el mensaje 981/96 y proyecto de ley (P.E.-452/96), prorrogando el plazo de cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario asumidas por las provincias signatarias del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento suscrito entre éstas y el Estado nacional el 12 de agosto de 1993; y, por las razones que dará el miembro informante os aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1998 el plazo para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993.

Art. 2º — Se asignará al financiamiento del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, hasta el 31 de diciembre de 1998:

- El 21 % de lo que se recaude por la aplicación de los gravámenes específicos a las naftas, gasolina natural, solvente, aguarrás y a los productos compuestos por una mezcla de hidrocarburos, en la medida que califiquen como naftas de acuerdo a las especificaciones técnicas de la reglamentación respectiva;
- El producido de impuestos que graven, en forma específica, el gas oil, diésel oil, kerosene y el gas natural comprimido.

Las asignaciones precedentes se incorporarán al artículo 18 del título III, capítulo VI, de la ley 23.966 y sus modificatorias.

Art. 3º — El producido del impuesto que gravare a los automotores, chasis con motor y motores de tales vehículos que utilicen como combustible gas oil, en lo que corresponda a una alícuota aplicable sobre la base imponible de hasta el diez por ciento (10 %), será destinado al financiamiento del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones hasta el 31 de diciembre de 1998.

Art. 4º — Desde el primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 1998, el producido del impuesto sobre los bienes personales se distribuirá íntegramente entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires en las proporciones determinadas por los índices de distribución asignados en el régimen de la ley 23.548 y sus modificaciones.

El monto a distribuir no podrá ser inferior a setecientos millones de pesos (\$ 700.000.000) anuales.

Art. 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad con el artículo 120 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 4 de septiembre de 1996.

Carlos A. Verna. — Ricardo A. Branda. —
César Mac Karthy. — Jorge J. Massat. —
Augusto Alasino. — Héctor M. Maya. —
Jorge A. Villaverde. — José O. Figueroa.

En disidencia parcial.

Antonio F. Cafiero.

Emilio M. Cantarero.

José L. Gioja.

ANTECEDENTE

Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 20 de agosto de 1996.

Al Honorable Congreso de la Nación:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proy...

de ley por el que se propicia la prórroga del plazo de cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario asumidas por las provincias signatarias del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento suscrito entre éstas y el Estado nacional el 12 de agosto de 1993.

Dicho plazo había sido prorrogado sucesivamente hasta el 31 de diciembre de 1996 mediante la sanción de las leyes 24.468 y 24.671.

La medida propuesta tiene presente tanto el objetivo y la voluntad de continuar avanzando en políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de la economía y la reactivación de las economías regionales, así como también el mejoramiento del estado de las finanzas públicas provinciales.

En virtud de ello, se acompaña el presente proyecto de ley.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

CARLOS S. MENEM.

Jorge A. Rodríguez. — Carlos V. Corach. —
Roque B. Fernández.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1998 el plazo para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993 relacionadas exclusivamente a materia tributaria que estuvieren pendientes de implementación.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.

Jorge A. Rodríguez. — Carlos V. Corach.
— Roque B. Fernández.

Complemento al Orden del Día N° 1.056

SUMARIO

Disidencia parcial del señor senador Romero Ferris al dictamen de la mayoría por el que se prorroga el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. (P.E.-452/96.)

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, doctor Carlos Ruckauf.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a los efectos de observar, en el tiempo y forma previstos por el artículo 115 del Reglamento de este Honorable Senado, el Orden del Día N° 1.056 correspondiente al expediente P.E.-452/96 sobre prórroga del plazo para el cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario asumidas por las provincias signatarias del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, hasta el 31 de diciembre de 1998.

Fundo esta observación en disidencia total con los artículos 2º y 3º del dictamen de comisión suscrito por la mayoría, por las razones que se exponen a continuación.

Por ambos artículos se asignan el producido del 21 % de lo recaudado por la aplicación de los gravámenes específicos a las naftas e hidrocarburos análogos y del 100 % de lo que ingrese por igual concepto por el gravamen al gasoil, diesel-oil, kerosene y gas natural comprimido con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones hasta el 31 de diciembre de 1998.

Igual destino se otorga al producido de un gravamen a los automotores, chasis con motor y motores de tales vehículos a crearse dentro de impuestos internos con idéntica fecha de vencimiento.

Se resta de la manera propuesta un importantísimo ingreso para las provincias, violentándose una vez más el régimen federal y los propósitos que inspiraron a este Congreso de la Nación en el dictado de las leyes 23.548 y 23.906. Una simple comparación de aquellas cifras con el actual "laberinto" —como bien fuera calificado— de distribución de los recursos muestra una constante caída de los porcentajes asignados a las provincias, particularmente en la distribución de los impuestos coparticipables, que del 54,66 % del total se hallan en menos del 36 % y con vistas a caer incluso debajo del mínimo previsto de la garantía legal del 34 %.

En materia del impuesto a la transferencia de combustibles tengo presente que el 71 % de ellos se destina a las provincias acorde con lo previsto por la ley 24.464 y se destinan fundamentalmente a la financiación de los fondos provinciales de vivienda, de vialidad y otros desarrollos de obras públicas, habiendo incumplido la Nación en repetidas veces con el pago de la garantía mensual mínima a que se obligó por dicha ley.

El requerimiento de que dichos fondos se destinarán a solventar el déficit del sistema previsional nacional, al que se han incorporado algunas cajas provinciales y la de la ciudad de Buenos Aires, al cual deben contribuir todas las provincias con la cesión de sus porcentajes de coparticipación según ambas leyes "en un marco de solidaridad", encierra un grave sofisma que se traduce en un notorio perjuicio para la totalidad del interior argentino.

El sistema previsional nacional concentra más del 70 % de sus prestaciones en el área de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Sus beneficiarios, por ende, gastan sus ingresos en dichos ámbitos geográficos, con lo cual fortalecen la vida económica de las zonas que habitan.

El impuesto al gasoil, diesel oil y gas comprimido, se abona principalmente en las zonas de producción agropecuarias, en el transporte de los productos hacia los mercados y en los establecimientos fabriles. El flujo de fondos que perciben productores y fabricantes se transferirá por esta vía a los grandes centros urbanos, particularmente al área que rodea la Capital Federal. Se asfixia así al interior de modo repetido, intentando cubrir un sistema previsional inviable en el actual modo

de financiación y a la vez, cargando las tintas de sus defectos sobre este Congreso de la Nación que termina siendo quien pone los límites dentro de una supuesta ley "de solidaridad" cuando debiera llamársela "de cercenamiento de los derechos de los trabajadores en patividad".

De la manera citada se seguirán neutralizando los efectos positivos de reducción de costos que se intentó lograr con la reducción de aportes patronales sobre los salarios —la llamada "devaluación sin devaluar"— así como también el intento de consolidar una fuente de ahorro interno a través del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que terminó financiando el déficit que ambos generan en lugar de hacer lo propio con aquellos rubros que propenden al desarrollo y crecimiento de la República.

La emergencia invocada es muy grave, tanto o más que las que sufren las provincias. Igual argumento se usó al apropiarse por un año el Estado nacional del incremento de 3 puntos a la tasa del impuesto al valor agregado, despojando al interior de su derecho a percibir más de 1.200 millones de pesos y encareciendo sus costos.

Hemos visto transferir, a partir de la cesión del incremento de 16 % a 18 % del IVA en modo constante, más conceptos y cada vez mayores fondos al SIJyP: 15 % de toda la coparticipación, 20 % del impuesto a las ganancias, 90 % del impuesto a los bienes personales. Se añade ahora 21 % de las naftas y el 100 % del gas-oil. ¿Se volverán a gravar los pulsos telefónicos y el consumo domiciliario de gas? Todo resultará poco en el actual esquema financiero. Por ello insistiré en el sistema propuesto del gravamen a las transacciones que permite la financiación integral del sistema, incluido el PAMI, y cuya sustentación doctrinaria que los fondos que alimentan el sistema provengan de las mismas áreas donde aquellos se gastan resalta la equidad tributaria.

Las razones expuestas en forma abreviada fundamentan mi disidencia total con dichos artículos.

Saludo al señor presidente con mi consideración más distinguida.

José A. Romero Feris.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por La Pampa, miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sr. Verna. — Señor presidente: tenemos en consideración un proyecto de ley originado en el Poder Ejecutivo con el propósito, tal como venía redactado, de extender el plazo para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, comúnmente denominado "Pacto Fiscal II" en lo que hace a la materia tributaria.

El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Cámara incorporó

otras disposiciones tendientes a prever el destino futuro de los recursos derivados de las modificaciones que, en sede del gobierno nacional, fueron proyectadas en distintos impuestos, principalmente en el impuesto sobre los combustibles líquidos, con el agregado de otro sobre el gas natural comprimido y un impuesto interno sobre determinado vehículos y motores gasoleros.

Como es conocido por todos, el denominado paquete fiscal ha estado en permanente revisión en lo que hace a su contenido y al destino de los recursos, aspecto este último que atañe al proyecto que estamos considerando.

Por tal razón, en el seno de la bancada que integro se ha elaborado una propuesta de modificaciones al dictamen que luego expondré para consideración de esta Honorable Cámara.

El texto del dictamen está conformado, en su parte dispositiva, por cuatro artículos.

El artículo 1º dispone la prórroga hasta el 31 de diciembre de 1998 del plazo para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento firmado el 12 de agosto de 1993.

En el curso de este año tuvimos ocasión de aprobar, como iniciativa de esta Honorable Cámara, dos proyectos de ley referidos al Pacto Fiscal II. El primero disponía la prórroga del mismo hasta el 31 de diciembre de 1996, pero no fue considerado en revisión por la Cámara de Diputados; y el segundo prorrogó, con efecto retroactivo al 1º de julio de 1995, el compromiso de la Nación de garantizar a las provincias un mínimo de coparticipación de 740 millones de pesos mensuales, quedando sancionado como ley 24.671.

Tal como recordáramos en aquellas oportunidades, el mencionado Pacto Fiscal fue promovido por el Poder Ejecutivo nacional a partir de la sanción del decreto 1.807 del 27 de agosto de 1993, que instruyó al Ministerio de Economía y al Banco de la Nación para instrumentar su aplicación según el texto que se incorporó como anexo 1, formando parte de ese decreto.

El contenido del Pacto era de carácter eminentemente tributario, impulsando un reordenamiento de los sistemas impositivos nacional y provinciales tendiente a eliminar los impuestos considerados distorsivos en virtud de recargar indebidamente los costos de producción.

Para las provincias, algunos de esos compromisos eran de acción inmediata y otros tenían como término límite el 30 de junio de 1995, fecha que fue prorrogada hasta el 1º de abril de

1996 por el artículo 5º de la ley 24.468 — sancionada el 6 de marzo de 1995 — en lo referente a las cláusulas del Pacto relativas exclusivamente a materia tributaria cuyo vencimiento hubiese operado u operase con anterioridad a esa fecha y que estuvieran pendientes de cumplimiento.

En su conjunto, las provincias han hecho avances considerables en el cumplimiento de sus compromisos, tanto en materia tributaria como en otros temas que incluía el Pacto — las privatizaciones y el traspaso de las cajas de jubilaciones a la Nación —.

También decíamos que tales avances han implicado un significativo esfuerzo de reordenamiento y reconversión de las administraciones provinciales. De hecho, entre las obligaciones sustanciales asumidas por las provincias, la única pendiente de ejecución es la sustitución del impuesto sobre los ingresos brutos por uno sobre las ventas finales.

Por lo tanto, el propósito del proyecto que estamos considerando es acompañar el proceso en su etapa final con el apoyo financiero que sirvió de sustento al esfuerzo de transformación, de forma de asegurar su adecuada conclusión en un lapso que permita estructurar una sustitución que implique introducir un gravamen de alta complejidad para administrar en su recaudación, teniendo en cuenta el elevado número de contribuyentes a empadronar y, luego, controlar.

Aquí hay una diferencia entre el dictamen de la comisión y el proyecto del Ejecutivo. En este último se establece que se prorroga solamente aquello que está relacionado exclusivamente con materia tributaria y que está pendiente de implementación. En el dictamen se prorroga la totalidad del Pacto, dado que hay puntos — como la privatización de las cajas y la desregulación económica — que las provincias aún no han cumplimentado.

Los restantes artículos del dictamen se vinculan con las proyectadas modificaciones a algunos impuestos del sistema tributario nacional. Tienen el siguiente doble propósito: por un lado, asegurar una razonable contribución a las necesidades financieras del Tesoro nacional; por el otro, como representantes de los intereses provinciales, salvaguardar la participación que cabe a las provincias que se verán afectadas como fuentes económicas del producido derivado de tales modificaciones.

En todos los casos, estas disposiciones referidas a los destinos de los recursos involucrados tienen carácter temporal, otorgándoseles vigencia hasta el 31 de diciembre de 1998.

El artículo 2º previene sobre el destino de la recaudación del impuesto sobre los combustibles líquidos actualmente gravados y los que pudieren incorporarse y, asimismo, de un impuesto sobre el gas natural comprimido.

El texto del impuesto sobre los combustibles líquidos constituye el capítulo I del título III de la ley 23.966, cuyo único artículo — el 7º, a través de cuatro capítulos — legisla sobre los impuestos a los combustibles líquidos y sobre el gas natural, este último luego derogado.

En la actualidad, el impuesto sobre los combustibles líquidos alcanza a las distintas clases de nafta, la gasolina natural, el solvente y el aguarrás.

En este orden, está proyectado un aumento de los montos vigentes del impuesto sobre dichas clases de combustibles y la incorporación al gravamen del gas oil, del diesel oil, del kerosene y de los compuestos mezcla de hidrocarburos que califiquen como naftas.

Asimismo, está prevista la restitución del derogado capítulo II del título III de la ley 23.966 — que anteriormente gravaba el gas natural — a través ahora de un gravamen al gas natural comprimido.

Este artículo 2º del proyecto que estamos considerando prevé que el producido de los incrementos e incorporaciones tenga por destino la financiación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones.

Si tenemos en cuenta que esta disposición altera la actual distribución de la recaudación entre la Nación, las provincias y el FONAVI establecida en el capítulo IV del título III de la ley 23.966, artículo 18, el último párrafo del artículo proyectado dispone la incorporación de esta modificación al texto de dicho artículo 18.

El artículo 3º, con el mismo propósito antes señalado, previene sobre el destino del producido de un impuesto que grave la venta de automotores, chasis con motor y motores que utilicen como combustible el gas oil, asignándolo también al sistema integrado de jubilaciones y pensiones en el monto que resulte de la aplicación de una tasa de hasta el 10 por ciento.

El artículo 4º del dictamen contiene el cambio de la distribución actual del producido del impuesto sobre los bienes personales, del 90 por ciento para la Nación y 10 por ciento para las provincias, con destino a los regímenes de previsión social, asignándolo íntegramente a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires en las proporciones que surgen de la aplicación de la ley

23.548, estableciendo un piso de 700 millones de pesos anuales.

Señor presidente: como expresara al comienzo de mi informe, tanto las modificaciones tributarias como el destino de su producido han estado en permanente revisión, lo que ha contribuido a enmendar la idea original de quienes impulsamos el presente proyecto.

Por lo tanto, paso a informar a esta Honorable Cámara las modificaciones al dictamen que sometemos a su consideración.

El artículo 1º se mantiene tal como aparece en el dictamen. En el artículo 2º se suprime el segundo párrafo sobre la incorporación de sus disposiciones al artículo 18 del texto de la ley del impuesto sobre los combustibles líquidos y se agregan como segundo y tercer párrafos los siguientes: "El setenta y nueve por ciento (79%) restante de la recaudación de los impuestos a que hace referencia el inciso a), se distribuirá de conformidad a lo previsto en el artículo 18 del título III, capítulo IV, de la ley 23.966 y sus modificaciones.

"Las asignaciones previstas en el presente artículo se efectuarán, en su caso, a partir del día en que se hagan efectivos los incrementos del impuesto para los productos ya alcanzados por el tributo y, para los productos del inciso b), en su caso, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la norma que disponga su gravabilidad".

El propósito de estos agregados hace a la técnica legislativa y es dar mayor precisión a la forma de asignar el producido del impuesto sobre los combustibles, en la medida en que sea modificado, indicando además la fecha en que entrará en vigencia.

Proponemos la sustitución del artículo 4º por el siguiente texto: "Suspéndese desde el primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial y hasta el 31 de diciembre de 1998, la aplicación de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 30 del título IV de la ley 23.966 y sus modificaciones, para el impuesto sobre los bienes personales.

"Durante el período mencionado, los fondos recaudados a que se refiere el citado inciso se distribuirán de conformidad con lo dispuesto en el régimen de coparticipación de la ley 23.548, y sus modificaciones, incluyéndose a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur según las disposiciones vigentes".

El texto del dictamen se refiere al destino de la totalidad del producido del impuesto sobre los bienes personales.

Teniendo en cuenta que conforme al mencionado artículo 30 el 10 por ciento hoy ya está destinado a las provincias para financiamiento de sus regímenes previsionales, consideramos que corresponde reasignar únicamente el 90 por ciento actualmente destinado al régimen nacional de previsión.

Cabe señalar que no se hace mención a un piso de recaudación a distribuir en función de la incorporación de un nuevo artículo.

El texto de ese nuevo artículo —el 5º—, que sometemos a la consideración de los señores senadores, es el siguiente: "Desde el primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial y hasta el 31 de diciembre de 1998, ambas fechas inclusive, el destino del producido del impuestos a las ganancias, establecido en el primer artículo incorporado a continuación del artículo 102 de la ley de dicho tributo, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, se hará efectivo con la previa detracción de la suma de 580 millones de pesos (\$580.000.000) anuales, cuyo destino será el siguiente:

"a) La suma de 120 millones de pesos (\$120.000.000) anuales para el sistema integrado de jubilaciones y pensiones;

"b) La suma de 20 millones de pesos (\$20.000.000) anuales para refuerzo de la cuenta especial 550; Fondos de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias";

"c) La suma de 440 millones de pesos (\$440.000.000) anuales al conjunto de las provincias y para distribuir entre ellas según las proporciones establecidas en los artículos 3º y 4º de la ley 23.548, y sus modificaciones, incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, conforme a las disposiciones vigentes.

"Las sumas que correspondan a las provincias en virtud de lo dispuesto en el presente artículo les serán liquidadas mensualmente en la proporción correspondiente".

De esta forma, señor presidente, entendemos razonablemente contemplada la necesaria correspondencia que debe existir entre el reparto de los recursos públicos y la fuente económica territorial que los genera, con una atención especial para sobrellevar la insuficiencia financiera que afecta al Estado nacional, que interpretamos como coyuntural, y cuya asistencia, en definitiva, es responsabilidad de todos.

Por lo expuesto, es que solicitamos a la Cámara de Senadores la aprobación al proyecto en los términos propuestos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza, de la Unión Cívica Radical.

Sr. Genoud. — Señor presidente: como ha ocurrido en anteriores oportunidades, en sesiones donde hemos debatido y votado pactos federales fiscales, la Unión Cívica Radical votará negativamente la iniciativa que estamos abordando.

A los argumentos que hemos dado en cada oportunidad en que se han tratado los pactos fiscales en los años 1993 y 1995 —los pactos fiscales 1 y 2, respectivamente— ahora se suman argumentos de carácter constitucional que fundamentan nuestra negativa.

En esta ocasión, señor presidente, a criterio de nuestra bancada —y seguramente esto es compartido por otros sectores de opinión en el país, que ya se han pronunciado—, al prorrogar el Pacto Fiscal número 2 hasta el 31 de diciembre de 1998, estamos vulnerando el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional y también la Cláusula Transitoria Sexta.

Esto en virtud de que los constituyentes de Santa Fe-Paraná, en oportunidad de reformar la Constitución Nacional, consagraron que el Congreso Nacional debía dictar una ley convenio que determinare un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Antonio F. Cafiero.

Sr. Genoud. — Además, señala la Cláusula Transitoria Sexta que la ley convenio, que se refiere a la coparticipación federal de impuestos, debe ser dictada antes del 31 de diciembre de 1996. De tal modo que la voluntad del constituyente, en la Constitución reformada, establece claramente cuáles son las atribuciones del Congreso Nacional.

En primer lugar, establece el principio de que el Congreso puede crear impuestos indirectos, en concurrencia con la facultad que tienen las provincias para ello.

Luego, señala que puede crear también impuestos directos, siempre y cuando los mismos sean temporarios y —agrega— cuando razones de defensa, seguridad o bienestar general así lo justifiquen.

Y señala también, como principio general, que los impuestos creados —tanto directos como indirectos— deben ser coparticipables, a excepción de aquellos que —según puntualmente se determine— tengan asignaciones específicas, los

cuales deben tener un plazo de duración determinado.

O sea que se consagra el principio de coparticipación de todos los impuestos y la facultad por tiempo determinado de fijar asignaciones específicas para los impuestos. ¿Por qué los constituyentes establecieron un plazo, concretamente el 31 de diciembre de 1996, para discutir una nueva norma de coparticipación federal de impuestos? Porque si hay un cuerpo en la Nación que conoce de las tribulaciones de las provincias en su permanente lucha por recursos financieros es el Senado nacional.

Este recinto ha sido testigo de numerosos debates y discusiones vinculados a esta conflictiva relación entre la Nación y las provincias en el ámbito de las finanzas públicas. Y porque nuestro sistema impositivo está tan complicado como consecuencia de estar legislando a través de parches y de correcciones, podemos concluir, por ejemplo, que aun en impuestos similares no hay ninguno que se distribuya igual que otro y que se legisla con notoria improvisación y de acuerdo con las necesidades o urgencias coyunturales y momentáneas. La última prórroga del Pacto Fiscal Federal fue publicada el 1º de agosto de este año; no han pasado dos meses y estamos sancionando una nueva prórroga del Pacto Fiscal.

Hay lo que se llama un alto grado de incertidumbre en materia impositiva en la Argentina. Por ello era que aparecía como una fuerte demanda de la sociedad argentina, de los estados provinciales y de los distintos sectores de opinión que conforman en definitiva la opinión financiera en la República que era imprescindible dar certeza y transparencia a las relaciones financieras entre la Nación y las provincias argentinas. Ahora nos encontramos con un proyecto gestado en el Poder Ejecutivo nacional, por el cual se prorroga por dos años el Pacto Federal Fiscal, dejando sin efecto la posibilidad de discutir en profundidad un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos.

Recordemos que el 1º de abril el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 304, por el cual convocó a este Senado nacional a realizar la tarea tendiente a la sanción de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Además, señaló que el responsable de la coordinación de estas tareas era el jefe de Gabinete de Ministros. Así fue como este Senado se abocó inmediatamente a la creación de una comisión específica para elaborar un proyecto de coparticipación federal de impuestos, que va a quedar evaporado

como consecuencia de la sanción que seguramente le dará la Cámara alta a este proyecto, que nació en el Poder Ejecutivo y que lamentablemente tendrá la aceptación de la mayoría de los integrantes de este cuerpo.

Digo que mientras en la Constituyente y en todos los sectores políticos de la opinión surge con claridad cuál es la necesidad —y creo que en esto podemos encontrar notorias coincidencias, mucho más allá de lo esperado, con senadores de distintas bancadas—, hay lo que no titubeo en señalar como un país ideal, un país formal, que es aquel que se diseñó en la Constituyente de Santa Fe-Paraná. Y otro es el país real, que es este que cuando tiene que resolver un problema echa mano a cualquier proyecto de ley; que prorroga por distintos mecanismos —o por ley, pero con notoria frecuencia—, los pactos fiscales y que no se aboca a avanzar sobre un nuevo régimen impositivo que sea transparente, simple, sencillo y que de algún modo termine con la angustia de las provincias y de la Nación de estar permanentemente litigando por los centavos que a uno o a otro le corresponden.

En definitiva, tenemos un régimen fiscal que es un laberinto técnico y jurídico al cual pueden acceder contados técnicos y especialistas. No dudo en señalar que esto beneficia a los intereses de la Nación. Mientras más confuso es el sistema impositivo argentino, mayor perjuicio para las provincias y, obviamente, mayores beneficios para la Nación. Porque el negocio financiero de la Nación —y me refiero a la Nación de este gobierno como a la de otros— es, casualmente, tener un verdadero fárrago legislativo en materia de distribución de recursos fiscales para que luego aparezcan las compensaciones que habitualmente realizan los gobiernos nacionales hacia unas u otras provincias a efectos de reparar lo que pueden ser perjuicios de carácter fiscal o impositivo.

En una palabra, señor presidente, creo que se va a dar un paso altamente perjudicial, en primer término, para la eficacia del régimen impositivo argentino y, en segundo lugar, para los propios intereses de las provincias argentinas que deseamos fervientemente la discusión en profundidad de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos...

Sr. Presidente (Cafiero). — La Presidencia solicita a los senadores que están de pie que se sirvan ocupar sus bancas.

Sr. Genoud. — Con este proyecto, señor presidente, se nos evapora la posibilidad de discutir un nuevo régimen de coparticipación federal de

impuestos sobre el que todos teníamos una gran esperanza.

Por supuesto que advertíamos que iba a ser un trabajo esfuerzo; que iba a ser una tarea titánica armonizar no sólo los intereses entre las provincias sino también, luego, hacerlo con los intereses de la Nación. Pero creíamos que era imprescindible comenzar a discutir, pues, como establece la Constitución, primero, todos los impuestos se coparticipan y, luego como excepción, hay que determinar cuáles son los que tienen asignación específica; discutir cuáles son los impuestos que integran en definitiva la coparticipación bruta.

Pero, ¿por qué queríamos discutir esto, señor presidente? Porque pensábamos que restableciendo el principio de la masa coparticipable las provincias iban a ver cómo retornaban muchos de los ingresos que les fue quitando este gobierno con la administración del doctor Cavallo desde 1990 a través de distintos mecanismos que tantas veces hemos mencionado en este recinto.

En tal sentido podemos mencionar, por ejemplo, la deducción del 11 por ciento del IVA para ser destinado al sistema previsional; cuando se destinó el 10 por ciento del impuesto a las ganancias para el Fondo Conurbano Bonaerense, hoy Fondo de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires; cuando se detrajo el 2 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias para el Fondo de los ATN; cuando se dispuso que se destinara el 15 por ciento de la coparticipación bruta al sistema previsional; y, no hace mucho tiempo —ahora lo volveremos a modificar—, cuando se resolvió que el 100 por ciento de lo recaudado en impuestos a los bienes personales también iba al sistema previsional.

Todas estas decisiones que tomó el gobierno nacional, obviamente con el apoyo de los bloques mayoritarios del Congreso, significaron paulatinas mutilaciones a recursos de las provincias. Entonces, las provincias veían afectados sus recursos; no se les disminuía el coeficiente de distribución sino que se les iba achicando la masa coparticipable, que, en definitiva, son los recursos que finalmente terminan distribuyéndose entre la Nación y cada una de ellas.

Este es un largo peregrinaje, señor presidente. Todo empezó —y voy a hacer una breve relación de los hechos— en 1991, cuando el entonces ministro Cavallo puso en funcionamiento el plan de desmonopolización, de desburocratización, privatizaciones o reforma del Estado.

Aplicó el primer cepo a las provincias —obviamente también pasó por la discusión en este re-

cinto, y a esas exposiciones me remito — cuando dispuso la transferencia a ellas de muchos servicios. Pero lo lamentable no era la transferencia en sí sino que no fue acompañada por el financiamiento suficiente. Así se transfirieron a las provincias argentinas escuelas, hospitales y también muchos programas sociales. Y a la hora en que las provincias tuvieron que afrontar la administración de todos estos servicios, nos encontramos con que a través de los distintos procedimientos que oportunamente denunciemos, contemporáneamente no se habían acompañado los recursos necesarios para ello. Y esto significó un duro golpe para las provincias argentinas.

En 1992 se vota el primer pacto fiscal, en cuyo origen quiero ser absolutamente claro. En la Argentina se había producido un notorio incremento en la recaudación impositiva. En esa época señalamos como un mérito del gobierno el hecho de que como consecuencia de haber sido implantada la cultura impositiva en la Argentina, empezaban a verse los resultados. Efectivamente, tanto a fines de 1991 como durante 1992 se verificó un crecimiento importante en la recaudación fiscal.

Sr. Presidente (Cafiero). — El señor senador Cantarero le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Genoud. — Prefiero terminar mi exposición, señor presidente. Creo que dispongo de 40 minutos más, y no sé si se me va a alcanzar el tiempo.

Sr. Presidente (Cafiero). — Lo lamento, señor senador. No le ha sido concedida la interrupción.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — En ese momento reconocíamos que había habido un incremento en la recaudación impositiva. Fue así que sobrevino el primer pacto fiscal, que significó privar a las provincias de ese incremento. En efecto, la proposición que vino del Poder Ejecutivo fue establecer un piso de 740 millones de pesos para la coparticipación federal a las provincias, y una detracción del 15 por ciento para el sistema previsional.

Cuando llegó la época de bonanza, es decir, cuando hubo mayor recaudación, se quitó a las provincias ese 15 por ciento, cuyo destino, se dijo, era el sistema previsional, siendo que en las propias provincias nacía el gran esfuerzo de los contribuyentes para engrosar las arcas del Estado.

Luego vino el pacto fiscal número dos, señor presidente, que fue más grave y tuvo alcances mayores en el impacto negativo a los estados provinciales. Dado que la recaudación seguía creciendo, se determinó que todos aquellos ingresos por sobre los 740 millones de pesos que recibían las provincias no podían ser gastados por éstas en lo que quisiesen. Se les determinó una finalidad, un objetivo y una previa autorización del gobierno nacional. Así se estableció que lo que recibiesen por sobre ese piso garantizado de coparticipación federal de impuestos tenía que estar destinado a los planes de reforma del Estado provincial —obsesión de Cavallo en ese momento—, pero no a cualquier reforma del Estado provincial, sino a aquellas previamente autorizadas por el gobierno nacional. Es decir que los impuestos pagados en las provincias llegaban a la Nación y luego retornaban a aquéllas, pero para ser utilizados en los estados provinciales debía previamente contarse con una habilitación del gobierno nacional, ejerciendo el Estado nacional en contra de lo que establece la Constitución una especie de tutela o, más todavía, una suerte de curatela sobre un incapaz, que en este caso vendría a ser la provincia, que no podía gastar en lo que quisiese, sino en lo que previamente le autorizaba el área económica.

Además, ese pacto fiscal número dos estableció, por ejemplo, la obligatoriedad de transferir cajas de jubilaciones, empresas hidroeléctricas que debían ser privatizadas, bancos provinciales, etcétera. Si bien hubo excepciones, la presión fue tan grande que efectivamente debió cumplirse con lo que rezaban dichos pactos, que, en general, suscribieron prácticamente todos los gobernadores de provincia.

Además, señor presidente, aparece un segundo cepo sobre las provincias. En efecto, a estas provincias a las que se les estaba quitando fondos a través de la detracción de la masa coparticipable, ahora se les estableció el pacto fiscal número dos. Tuvieron que derogar los impuestos provinciales sobre transferencia de electricidad, gas y combustible, ya que éste era un acuerdo que provenía de los concesionarios que se hacían cargo de los servicios públicos respectivos; tuvieron que derogar impuestos sobre interés a los débitos bancarios, disminuir el impuesto a los automotores, unificar el impuesto inmobiliario con el resto de las provincias, eliminar el impuesto a los sellos e ingresos brutos. Respecto de esta última medida, debo decir que fue un hueso duro de roer, porque muchas provincias no podían renunciar a cobrar ingresos

brutos. Por eso es que en los últimos días de su gestión tuvimos aquella muy fuerte presión del ministro Cavallo para que las provincias en definitiva se aviniesen a derogar efectivamente los ingresos brutos, que en algunas representan el 18 o el 20 por ciento de sus ingresos tributarios.

En una palabra, señor presidente, acá hay tres cepos a las provincias. Esta es la historia triste o gris de los pactos fiscales. Por un lado, se les reducían los ingresos, pero no modificando el coeficiente de coparticipación, sino achicando la masa coparticipable a través de las decisiones que ya reseñé.

En segundo lugar, estableciéndoles asignación específica para ciertos y determinados impuestos. Y, en tercer lugar, señor presidente, privándoselas de un modo notorio de la facultad tributaria que constitucionalmente les pertenece.

Podrá decirme algún senador justicialista que, en definitiva, los pactos fiscales eran aprobados por los gobernadores. Y seguramente muchos de ellos —algunos eran de la Unión Cívica Radical— tenían la opción de firmar los pactos fiscales como estaban o resignarse a sucumbir. De tal modo que, por necesidad y luego de muchas negociaciones y gestiones demoradas, incluso por meses, todos los gobernadores, a excepción del de Córdoba en ese entonces, se opusieron por todos los medios a la suscripción de estos pactos en materia fiscal que regulan la actividad de la Nación y de las provincias.

Señor presidente: esto es lo que se refiere al artículo 1º, que prorroga el Pacto Federal Fiscal hasta el 31 de diciembre de 1998.

No he de hacer una relación de cuál es el contenido de los cinco artículos que prevé este proyecto, por el que solamente se legisla en materia de distribución de los recursos tributarios sobre una ley que ni siquiera tiene sanción de la Cámara de Diputados. De tal modo que lo que estamos considerando hoy en la Cámara de Senadores es una suerte de diseño de distribución de recursos tributarios.

Hace una hora fracasó la sesión de la Cámara de Diputados en la que, seguramente, se iba a aprobar un paquete de medidas impositivas, por el que se modificaban las alícuotas de algunos impuestos sobre los cuales era razonable discutir posteriormente los mecanismos de distribución.

Me permito decir que, respecto de las medidas impositivas cuyo destino hoy estamos legislando, la Unión Cívica Radical tiene una posición tomada, que habrá de trasuntarse en el voto negativo a la hora de tratarse estas medidas eco-

nómicas de carácter tributario en la Cámara de Diputados, y que es oponerse, votar negativamente la modificación de los impuestos a las naftas como a las ganancias.

No titubeamos en calificar el incremento de impuestos a las naftas como francamente recesivo y regresivo. El gasoil es el principal insumo de la producción agropecuaria, señor presidente, y en estos momentos tanto el agro como la industria están sufriendo los coletazos de un grave proceso recesivo. Además, a través del encarecimiento del flete, como han señalado las entidades que agrupan a los transportistas argentinos, fundamentalmente del transporte por carreteras, el incremento en tal materia va a tener un efecto negativo multiplicador hacia toda la economía.

Pero lo más grave, y me coloco no solamente en la situación del pequeño y mediano productor agropecuario de la pampa húmeda, que también va a sufrir duramente el embate de este impuesto, sino en la situación del productor de mi provincia, del chacarero, del frutihorticultor de Río Negro o de Mendoza, es que al incrementarse el precio del gasoil, señor presidente, se está impactando negativamente en el costo interno de producción.

Resulta que el mayor conflicto y drama que tiene hoy el productor frutihortícola argentino es competir en condiciones medianamente iguales con países vecinos que, a raíz de procesos de apertura económica y de globalización, están ingresando productos primarios o de carácter industrial pero de origen agropecuario a precios mucho más bajos que los argentinos.

Recientemente he participado de una reunión de la Cámara de Frutihorticultores de Mendoza en la que se ha señalado cómo, con la actual apertura económica, han desaparecido los aranceles de importación, por ejemplo, para productos chilenos.

Hay que reconocer que en esto Chile demostró una gran eficiencia exportadora y una disminución notoria de los costos internos. Por lo tanto, un producto argentino no puede competir con uno chileno porque, por ejemplo, en el país trasandino un tractor vale el 70 por ciento de lo que cuesta en nuestro país; la energía es más barata y el precio del dinero en los créditos para productores agropecuarios —reitero que éste es sólo un ejemplo; seguramente en el curso del debate escucharemos otros más— es también más bajo en los países vecinos. En consecuencia, todos los componentes del costo interno son inferiores. A su vez, si a esto le

sumamos un encarecimiento del precio del gasoil, seguramente se acelerará el proceso de des-nivelación en materia de competencia no sólo de la producción frutihortícola sino también de la industrial.

Es por eso que digo que el impacto es negativo y recesivo, porque deja fuera de competencia tanto al productor agrario como al industrial de nuestro país.

Pero, además, este impuesto es regresivo. Si existe un impuesto al consumo masivo es, precisamente, el de las naftas. De tal modo que aquí una vez más nos apartamos del principio que dice que deben pagar más los que más tienen, porque si bien esta máxima se ve ampliamente satisfecha con el impulso directo, no ocurre lo mismo con el gravamen al consumo, ya que es igualitario.

A su vez, cabe señalar que el gasoil es un producto que consume el que más necesidades tiene. En efecto, quien compra un auto gasolero es quien pretende hacer economía, porque el tractor, el utilitario o la camioneta que utilizan este tipo de combustible son los vehículos que usan el pequeño o mediano productor o profesional, es decir, quienes deben hacer una economía muy ajustada y demasiado precisa a efectos de no quedar fuera de competencia. Por eso reitero que este impuesto es ampliamente recesivo y regresivo.

Por otro lado, en materia de impuesto a los bienes personales, me preocupa que se haya eliminado un párrafo que le garantizaba a las provincias 700 millones de pesos. Este es un tema que merece una especial consideración, porque solicitaremos al bloque Justicialista que incorpore una cláusula que originariamente se encontraba en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En efecto, en el artículo 4º del dictamen se establecía una garantía, obviamente por parte de la Nación, que aseguraba a las provincias un piso que ya no está. Y recordaremos que en esto los estados provinciales se llevan el ciento por ciento de lo producido del impuesto a los bienes personales.

Además, señor presidente, creo que el gravamen que se aplica sobre los bienes personales está mal llamado impuesto a la riqueza. En efecto, se trataba de un impuesto a la riqueza cuando la base tributaria la conformaban todos aquellos bienes que no estaban destinados a la producción, pero actualmente la integran tanto una casa en Mar del Plata, en Punta del Este o un Mercedes Benz, como un tractor, una quinta,

una chacra o un campo en plena etapa de producción.

De tal modo que esta base tributaria, que fue ampliada recientemente, determina que se trate del impuesto que antes se denominaba a los activos.

Por otro lado, cabe señalar que la recaudación del impuesto a los bienes personales ha sido muy fluctuante y cambiante. Los propios funcionarios de la Dirección General Impositiva reconocieron que este gravamen es de muy difícil recaudación y que verifica los más altos niveles de evasión.

Así, se calculó que tendrían que recaudarse aproximadamente 1.700 millones de pesos, en concepto de impuesto a los bienes personales, y pese a la modificación que se introdujo hace ocho o nueve meses, la recaudación no superó los 650 millones de pesos.

Por ello es que solicitamos que nuevamente se introduzca la cláusula que sugestivamente desapareció del dictamen, que hoy se ha traído a consideración de este cuerpo y que fue informado por el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El piso que se había establecido garantizaba a las provincias un ingreso fijo, determinado y cierto; de no estar establecido en la cláusula, el monto a percibir por los estados provinciales quedaría sometido otra vez a las fluctuaciones a que hice referencia.

Además, es preciso tener muy especialmente en cuenta que las provincias ya recibieron el adelanto de la recaudación para el año 96. De tal modo que éste es un impuesto que se va a liquidar el año que viene y realmente se asume un altísimo riesgo en lo que se refiere a los ingresos que este paquetazo impositivo puede generar.

Señor presidente: también señalo que cuando los gobernadores justicialistas se reunieron con el presidente de la Nación se puso un énfasis muy especial en este párrafo hasta el punto que el gobernador de mi provincia, con quien estuve ayer, explicaba que este impuesto, a través de ese piso garantizado, determinaba un monto que posibilitaba a la provincia obtener algunos recursos más —no muchos— de los que originariamente iba a recaudar si el proyecto fuera aprobado como se gestó inicialmente en el Poder Ejecutivo nacional.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, doctor Carlos F. Ruckauf.

Sr. Genoud. — Incluso, al dejarse librado el monto a lo que signifique la recaudación imposi-

tiva de este impuesto, vamos a incurrir en otro riesgo, como es el de caer en la inconstitucionalidad de esta ley, por imperio de la disposición transitoria sexta de la Constitución que establece que no puede haber medida legislativa alguna que signifique menguar los ingresos de los estados provinciales. Por eso dice que tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de los recursos vigentes.

El año próximo nos podemos encontrar con que los ingresos percibidos signifiquen, en definitiva, una mengua o una reducción de los importes que en materia fiscal le corresponden a cada provincia.

El sistema fiscal debe simplificarse. No titubeamos en señalar que el régimen tributario argentino es un verdadero jeroglífico. Pienso que, como establece la Constitución, tiene que consagrarse que los impuestos sean coparticipables.

La excepción absoluta debe constituir la asignaciones específicas de recursos.

Tiene que establecerse un régimen tributario que dé absoluta prioridad a los impuestos directos y no a los indirectos, a los efectos de que pierda regresividad el sistema fiscal.

Hago especial hincapié en un tema en el que seguramente va a haber coincidencias con integrantes de distintas bancadas y es procurar mayor eficiencia en el órgano de recaudación, la DGI. Y en esto tenemos autoridad porque cuando se discutió el presupuesto de la Nación en el que se preveía una cifra del orden de los mil millones de pesos para servir de sustento a la infraestructura y mejoramiento del órgano recaudador en la Argentina, el radicalismo no opuso objeciones al proyecto oficial en este tema, a los efectos de dotar a la DGI de mayor eficiencia en la tarea recaudatoria.

No es la primera vez que lo digo; cuando hay que modificar las leyes penales tributarias siempre ponemos la mayor voluntad. En la ley originaria se dispusieron nuevas figuras penales, se ampliaron otras que ya existían y se modificaron las penas. El bloque de la Unión Cívica Radical la votó porque entendía que la ley penal tributaria es un instrumento irremplazable e indispensable para lograr una mejor recaudación impositiva. Y en esto, señor presidente, recibimos con beneplácito el reconocimiento de altos funcionarios del área económica.

La DGI no está logrando los resultados que eran de esperar y, por otra parte, hay una clara responsabilidad de los mecanismos de recaudación impositiva en la caída vertical que se veri-

ficó hasta hace sesenta días, con una breve meseta en los últimos cuarenta y cinco días.

Concluyo haciendo algunas reflexiones que simplemente son el piso de marcha o la base para un debate que seguramente va a ser extenso y que van a complementar distintos legisladores de la bancada de la Unión Cívica Radical, que no solamente se van a pronunciar sobre el tema sino que van a realizar también aportes concretos a través de modificaciones que se van a proponer a distintos artículos.

Las provincias argentinas, señor presidente, han sufrido este gran sacrificio en el orden fiscal, impuesto la mayoría de las veces por los designios del poder central; han tenido que sufrir un grave ajuste que ha motivado, entre otras cosas, el despido de gran parte de su personal administrativo y la reducción de las contrataciones y los sueldos de la administración pública provincial; y han tenido que eliminar —al menos la mayoría de las provincias— organismos de la infraestructura administrativa que habían poseído durante décadas. Todo esto, señor presidente, ha sido reconocido en el penúltimo informe del Fondo Monetario Internacional que determina, de manera expresa, que las provincias argentinas han llevado a cabo un ajuste del orden de los 2.500 millones de pesos en los últimos cuatro años.

Me atrevo a decir, señor presidente, que en ninguna de las provincias argentinas se está llevando a cabo en la actualidad, una obra pública de convergadura. Existe un virtual estado de parálisis en materia de obras públicas, y las administraciones provinciales se han convertido en cajas recaudadoras de muy pocos impuestos internos, además de lo que reciben por coparticipación federal y lo poco que ingresa, en algunas de ellas, en concepto de regalías petrolíferas, todo lo cual se destina al pago de sueldos.

Y mientras todo esto ocurre en las provincias, ¿qué pasa en el orden nacional, señor presidente? ¿Qué pasa en ese Estado nacional que es el que ha impuesto a las provincias esta severa política de ajuste y les ha quitado recursos a través de los impuestos que paga cada uno de los provincianos?

Ese Estado nacional, señor presidente, ha liquidado 27 mil millones de pesos que habían ingresado al Tesoro a través de las privatizaciones, sin que sepamos, hasta el día de hoy, su destino. Ese Estado nacional, señor presidente, ha elevado el gasto público a la suma de 43 mil millones de pesos. Ese Estado nacional no ha logrado revertir las graves secuelas de la recesión, como un índice de desocupación del orden del

16,8 por ciento según la última encuesta. Ese Estado nacional ha llevado el endeudamiento público —a través de una deuda externa que permanentemente se refinancia— a más de 100 mil millones de dólares.

Este es, entonces, el contraste entre las provincias cada vez más pobres, que se dedican a administrar las pocas moneditas que reciben en materia impositiva, a pagar magros sueldos y que no tienen obra pública, y este Estado nacional, señor presidente, que piensa en hacer la "aeroisla", el puente Buenos Aires-Colonia y que ha generado una deuda de 100 mil millones de pesos.

Por estas razones es que queríamos discutir una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, que nos insuniera todo el tiempo que fuera necesario y con los funcionarios del Ministerio de Economía presentes en este recinto, tal como lo habíamos previsto en su momento. Pero todo esto lo hemos "tirado por la borda" al poner en marcha esta sesión, en la que nos encontramos ante la inminencia de una nueva prórroga del Pacto Fiscal, que no es otra cosa que la prórroga del hambre y de los sacrificios desiguales. Porque mientras existe austeridad en el interior del país, en donde los gobernadores no saben qué hacer con los pocos centavitos que tienen, en el orden nacional se produce un grave contraste de injusticia que nos llena de irritación.

En consecuencia, señor presidente, no podemos dejar pasar esta oportunidad para señalar que una vez más, con la complicidad de parte del Congreso de la Nación, se consuma una grave injusticia que tiene en las provincias una de las más profundas variables de ajuste desde 1990.

Dejo sentada así la posición de la Unión Cívica Radical no obstante lo cual habrá, seguramente, otras exposiciones que ampliarán estas consideraciones de tipo general.

Debo señalar también, señor presidente, que algunos senadores de la Unión Cívica Radical pueden discrepar parcialmente con esta exposición, y que nuestro bloque —así lo dejamos anunciado— ha dejado en libertad de acción a los señores para que voten según lo crean conveniente.

En consecuencia, no dudo en diferenciar aquí tres tipos de voto.

Habrà algunos que votarán a favor de esta norma por solidaridad política, o sea, por la necesidad de salvar un plan económico. Habrá otros que votarán favorablemente por necesidad; en este caso, se tratará de votos originados en los

pedidos angustiosos hechos por muchas administraciones provinciales a sus legisladores, dado que, si no se aprueba este proyecto de ley, seguramente tendrán menos recursos en el futuro para seguir abonando los sueldos de la administración pública. Por último, habrá quienes, como nosotros, votarán con plena convicción, porque realmente esperábamos discutir de aquí hasta el 31 de diciembre un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. Pensábamos que podíamos construir un sistema mucho más justo para la distribución de los ingresos fiscales que, en definitiva, son aportados por cada uno de los argentinos, cualquiera sea la región geográfica donde viven.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, del Partido Autonomista.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente: el tema en tratamiento es realmente importante y trascendente. Voy a hacer breves consideraciones sobre él porque ya en otras oportunidades nos hemos referido a esta cuestión.

En razón de lo manifestado por el señor senador Genoud, quiero dejar en claro que de ninguna manera el hecho de que en nombre de mi partido vaya a votar favorablemente en general este proyecto significa que renuncie a la aspiración, el anhelo y al deseo de que se dicte un nuevo régimen de coparticipación federal. Eso es algo distinto. Apruebo en general este proyecto pero señalo mi discrepancia en particular con respecto a los artículos 2º y 3º, los que rechazo expresamente.

He presentado un dictamen en minoría fundando mi disidencia parcial en conceptos que quiero ampliar aquí brevemente. Además, debo señalar que, sin lugar a dudas, el hecho de que aprobemos hoy este pacto fiscal no significa que renunciemos a la tarea de la Comisión de Coparticipación Federal, que integramos y a la que se convocó a participar a diversas autoridades y sectores interesados, con el fin de lograr la sanción de una nueva ley en la materia.

En primer lugar, doy mi aprobación a la propuesta del Poder Ejecutivo nacional de ampliar hasta fines de 1998 las obligaciones tributarias que las provincias se comprometieron a llevar a cabo en los denominados pactos fiscales, es decir, sustituir el impuesto a los ingresos brutos por un gravamen a la venta final de los bienes y derogar el impuesto de sellos en todos sus alcances.

En el pasado mes de mayo tratamos en este recinto la prórroga del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento firmado

originariamente en agosto de 1993, cuyo vencimiento formal había sucedido en julio de 1995, aun cuando diferentes interpretaciones entendían que se había prorrogado de hecho. No es ocioso recordar que aquella prórroga explícita con valor legal tuvo por objeto obligar al Poder Ejecutivo nacional a pagar la garantía del piso mensual a que se había comprometido en aquel pacto y que había dejado de abonar, abusando de una lectura propia de las normas vigentes.

El poco tiempo transcurrido desde aquel momento hace que la memoria tenga bien presente el áspero debate que suscitó entonces el hecho de fijar como fecha de vencimiento para esa supresión de los impuestos provinciales a los ingresos brutos y a los sellos el 31 de diciembre del corriente, toda vez que generaba un bache fiscal de grandes dimensiones en muchos estados provinciales.

Por ello, resulta una medida apropiada postergar ese vencimiento por dos años, lapso durante el cual se procurará hallar una solución que satisfaga la posición consensuada de las provincias.

He manifestado mi disidencia total con las propuestas de los artículos 2º y 3º, por los que se modifica la distribución del producido de los impuestos a las transferencias de combustibles, según, estaba fijada por la ley-convenio 23.966, y se destina en forma específica el incremento del impuesto a las naftas y análogos al sistema nacional de previsión social, así como el 100 por ciento del producido de los futuros impuestos que graven el gasoil, el diesel oil, el kerosene y el gas natural comprimido.

Igual destino se asigna al impuesto interno sobre automóviles, chasis y motores gasoleros, que se crea con una tasa del 10 por ciento, que no se coparticipará.

Esta discrepancia nace del triple perjuicio que han de sufrir las provincias, particularmente las más alejada de esta Capital Federal, que se ha de traducir otra vez en una asfixia, en un estrangulamiento de sus economías por la brutal transferencia de fondos hacia este conglomerado de Buenos Aires y sus alrededores.

Cuando se hizo presente en este Honorable Senado por última vez el ex ministro de Economía doctor Cavallo, para ser interpelado por las modificaciones a los impuestos internos, marcó que el costo fiscal por la desgravación del gasoil a 6,14 centavos por litro ascendía a poco más de 542 millones de pesos; a 12 centavos representa 1.060 millones de pesos, cuyo pago mayormente se realiza en el interior. Si añadimos el

producido del impuesto sobre el diesel oil, el kerosene, el fuel oil y el gas comprimido, esta cifra se elevará a unos 1.200 millones anuales.

El consumo de naftas gravadas ascendía a 6.450.000 metros cúbicos, por lo que este incremento de 10 centavos por litro significa un ingreso adicional de 645 millones de pesos, o sea que ambos rubros totalizan aproximadamente 1.850 millones anuales que ingresarán directamente en las cajas de la Nación para financiar la previsión social.

Por supuesto que estoy de acuerdo con que debe dotarse de medios auténticos de financiación al sistema previsional, pero estamos repitiendo aquello de "desvestir un santo para vestir a otro".

Las cifras expuestas señalan que las provincias resignan más de 1.300 millones de pesos anuales, de los cuales 780 millones tenían como destino específico los fondos provinciales de vivienda y otros 550 millones para los fondos viales y de infraestructura.

Estas cifras son suficientemente explícitas en cuanto a lo que dejará de percibir cada provincia en los próximos años. Podemos imaginarnos el retraso que causará en el interior la falta de estos fondos.

El segundo gran perjuicio que sufrirán las provincias está dado por la transferencia del flujo financiero de fondos al conurbano bonaerense. Como dije recién, el consumo de gasoil se efectúa mayormente en el interior del país. La aplicación del impuesto implica que su producido se transfiere hacia esta Capital; y si tenemos presente que más de un 70 por ciento de las prestaciones jubilatorias se abonan entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, es obvio que los recursos cedidos pasan a gastarse en esta área con sus consiguientes efectos económicos multiplicadores.

El tercer perjuicio nace de que los mayores impuestos a los combustibles serán deducibles en gran parte del impuesto a las ganancias. Considerando una deducción del 60 por ciento en la base tributaria, significa una reducción del producido futuro del gravamen del orden de los 300 millones anuales.

Habrà que adicionar a esa suma, si este Congreso de la Nación aprueba la reforma del impuesto a las ganancias como está formulada, el cómputo que se permitirá a los establecimientos agropecuarios por el mayor costo del gasoil. Si bien es cierto que un elevado número de productores no alcanza a lograr beneficios impositivos como para usar esta franquicia, entiendo

que la cifra a descontar será importante y caerá la recaudación efectiva de ganancias.

Estoy examinando este tema desde el punto de vista federal, considerando el perjuicio de las provincias. Es decir, entiendo que esa deducción debió afectarse directamente a los fondos que recibe la Nación.

Son también válidas para el artículo 3º las consideraciones anteriores en cuanto a nuevas resignaciones de fondos por parte de las provincias con destino a la previsión social nacional.

He brindado mi conformidad al despacho original del punto cuarto del orden del día, que se ha propuesto cambiar en este recinto, añadiéndose un artículo adicional por el cual se modifica la actual distribución del impuesto a las ganancias.

Entre ambos se diseña una suerte de compensación para las provincias, que puede representar alrededor de 750 millones de pesos anuales. La simple comparación con las cifras anteriores pone una vez más en evidencia que en cada vuelta de tuerca, en cada nuevo ajuste, vuelve a perder el federalismo.

Como anuncié al principio, voy a apoyar en general este proyecto en cuanto a la prórroga del Pacto Fiscal y a la modificación de la distribución de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales y, asimismo, a rechazar los cambios propuestos para el impuesto a la transferencia de combustibles y en materia de impuestos internos.

En definitiva, quiero señalar que, creo, es el mal menor para las provincias, a efectos de que las mismas reciban fondos que están necesitando con urgencia y —diría— con desesperación. Este es el motivo de la actitud que asumo en este momento.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: tal vez sería conveniente que a esta altura del debate cerráramos la lista de oradores —sea con quienes están anotados o con quienes desean hacerlo—, para determinar cuántos faltan hacer uso de la palabra y tener de esa manera alguna precisión respecto de la hora en que vamos a votar.

Sr. Presidente. — Queda cerrada la lista de oradores con los señores senadores Villarroel y Alasino.

Tiene la palabra el señor senador por Salta, del Partido Renovador.

Sr. Ulloa. — Señor presidente, señores legisladores: este proyecto viene al Senado porque se

trata de modificar, en definitiva, la ley de coparticipación federal. Por eso, y de acuerdo con lo que establece la Constitución, somos Cámara iniciadora.

Es conveniente que analicemos un poco qué ha pasado con las relaciones entre la Nación y las provincias. Entre 1973 y 1988, la ley 20.221 establecía que el 48,5 por ciento de los recursos coparticipables pertenecían a la Nación, otro 48,5 por ciento a las provincias y el 3 por ciento restante correspondía al Fondo de Desarrollo Regional.

En 1988 se cambió la ley por medio de la 23.548, que nos rige. Así, a la Nación le corresponde el 43,34 por ciento y a las provincias, el 56,66 por ciento. La diferencia entre los montos asignados a las provincias por las dos leyes mencionadas es de 8,16 por ciento y es consecuencia de que la mayoría de las provincias recibieron las escuelas y los hospitales y se les reconoció, entonces, ese incremento.

Después de esto fuimos perdiendo recursos. Debo reconocer, a fuer de sincero, que se incrementó la masa coparticipable porque se suspendieron las retenciones a las exportaciones y se reemplazaron por impuestos coparticipables. Pero de cualquier manera, fuimos perdiendo recursos.

Para la seguridad social destinamos el 11 por ciento del IVA y por el primer pacto fiscal, un 15 por ciento de la masa total de recursos. En cuanto a educación, la Nación, que tenía escuelas a su cargo, las transfirió a las provincias y destinó 1.000 millones de pesos de la masa de los recursos de la coparticipación primaria de lo que iba a las provincias para las escuelas que antes pagaba la Nación. Es decir que la Nación ahorró mil millones que asumimos las provincias.

La provincia de Buenos Aires y el conurbano tuvieron un 10 por ciento del impuesto a las ganancias, o sea, 600 millones de pesos más; un 2 por ciento el Ministerio del Interior para ATN, que es cierto que va a las provincias —no siempre— pero con otra distribución.

En lo que se refiere a salud, perdimos 200 millones de pesos sin darnos cuenta. Se puso la condición de que los hospitales pasaban a las provincias pero se sacaron 200 millones de la coparticipación que ellas recibían y que les fueron entregados a las que se transfirieron hospitales, es decir, Buenos Aires y la Capital Federal.

Mi provincia, una provincia pobre, por ejemplo, aporta 8 millones anuales para sostener los hospitales transferidos a Buenos Aires y a la Capital. Y el NOA, que es quizás la región más

pobre del país, aporta 40 millones de dólares anuales para sostener dichos hospitales.

También sucedió algo parecido con educación porque de los mil millones sacados de la coparticipación a las provincias se efectúa un reintegro a las que recibieron escuelas. Como la Nación había hecho un esfuerzo menor en las provincias más alejadas y mayor en las más importantes, resulta que las que tuvieron la ventaja de tener institutos escolares pagados por la Nación ahora reciben más plata. En este sentido, Salta, por ejemplo, tiene un déficit del orden de los 400 mil dólares mensuales por los servicios que le transfirieron de la enseñanza media.

Sr. Presidente. — El señor senador Gioja le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Ulloa. — Sí, cómo no, con mucho gusto.

Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por San Juan, del bloque justicialista.

Sr. Gioja. — Si bien es cierto lo que está diciendo el señor senador, quiero decirle que esta Cámara hace sesenta días sancionó por unanimidad un proyecto de ley que precisamente tiende a volver a la normalidad la situación derivada de la transferencia de los servicios educativos, de hospitales y de algunos planes asistenciales.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Salta, del Partido Renovador.

Sr. Ulloa. — Muchas gracias, señor senador.

Además, se dejaron de coparticipar tres puntos del IVA, es decir, 1.800 millones de pesos más con los que se quedó la Nación y que correspondería coparticipar a las provincias.

En definitiva, de aquel 56,66 por ciento para las provincias y 43,34 para la Nación, se pasó a 60 por ciento para la Nación y 40 por ciento para las provincias. Estos son los números reales que vivimos quienes tuvimos la responsabilidad de administrar una provincia.

Cop este sistema de transferencias, Salta en particular perdió una cifra del orden de los 100 millones de pesos anuales o 9 millones mensuales.

Firmamos el pacto fiscal número I el 12 de agosto de 1992 y debo decir que lo apoyé con entusiasmo porque consideraba que era necesario. Se había prendido una luz roja con el sistema pasivo. Realmente existía un drama con los jubilados que, por supuesto, viven en mi provincia y en todas las demás. Aceptamos que el 15 por

ciento de la coparticipación —que ya he mencionado— fuera al sistema de seguridad social.

Debo anticipar que, lamentablemente, la Nación nos hizo una maniobra no del todo clara. ¿Por qué? Porque decía que el 15 por ciento estaba destinado a la seguridad social y otros gastos operativos necesarios.

¿Qué hizo con lo destinado a esos otros gastos operativos necesarios? Pagó la garantía —como veremos después— y pagó también muchas cuentas, pero parte de los fondos no fueron a la seguridad social.

Es cierto que nos transfirieron el FONAVI, y esto es importante. La federalización del FONAVI fue otro de los motivos que me llevó a firmar ese pacto. El FONAVI en nuestras manos permitía una dinámica mucho mayor que aquella controlada desde la Plaza de Mayo por los funcionarios de Bienestar Social, que tienen todo mi respeto, pero los problemas no se solucionaban.

Esto nos permitió triplicar el número de casas que se construían en las provincias o por lo menos en la mía. Además, se condonaron las deudas. Mi provincia, por ejemplo, debía 83 millones de dólares al momento del traspaso del FONAVI y Buenos Aires debía 600 millones de dólares. Esta también fue una ventaja que contribuyó a que firmáramos el pacto.

Hubo 43 millones 800 mil dólares que recibieron una distribución distinta: para la Patagonia, para mi provincia fueron destinados dos millones y medio mensuales de esos casi 44 millones de dólares.

La Nación manifestó algo —alegremente, creo— que no se cumplió en ese pacto fiscal. Decía que las provincias deberían calcular su presupuesto considerando una masa coparticipable de 10.890 millones, que significaban 907 millones por mes. ¿Cómo no íbamos a apoyar eso? Reitero que se trataba de 10.890 millones. Sin embargo, no se cumplió. Puso una garantía de 725 millones, es cierto, que después llegó a 740 millones, en el pacto fiscal.

Los gobernadores —yo lo era en aquel entonces— apoyamos ese pacto fiscal al igual que otras cosas que nos pidieron en ese momento. Se trataba, por supuesto, de apoyo político. La decisión estaba en manos de este Congreso. Pero no es lo mismo cuando todos los gobernadores piden algo que a lo mejor es impopular, que cuando debe salir el Congreso a poner la cara.

Y pusimos la cara para la reforma del régimen previsional, reforma que no salió como hubiéramos querido, porque ese 32 por ciento de lo

que capitaliza cada afiliado y que se lo queda la AFJP, realmente no es lógico. Estamos hablando del 32 por ciento de todos los recursos que cobran las AFJP —por esa ley de previsión—, que quedan en sus manos. Por esa razón hacen esas grandes publicidades, con grandes edificios, y esa gran ostentación —casi diría— de recursos financieros.

La federalización de los hidrocarburos es muy importante; y la apoyamos con calor. Lo mismo sucedió con la privatización de YPF. Esa fue más dura, pero YPF no era eficiente —lo reconocimos—; por supuesto, tuvo un costo político: en mi provincia se quedaron sin trabajo 3.400 personas al privatizarse YPF.

Nos pidieron también que apoyáramos la privatización de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, la Casa de Moneda y el BANADE, y nos dijeron: aquí hay 460 millones de pesos, de los cuales el 50 por ciento —lo escribieron y lo firmaron— va para la reforma del estado provincial —también, una “buena zanahoria”. Se destinarían alrededor de 230 millones para reformar el Estado... Nunca los vimos.

En concreto, por las ventas se obtuvieron 83 millones 600 mil pesos, de los cuales no llegó un solo centavo a la provincia. Un nuevo incumplimiento.

También apoyamos y firmamos los compromisos respecto de la transferencia de las escuelas a mi provincia. Mientras tanto, la Nación acusaba a las provincias de que eran las culpables del desborde del gasto público.

Era la cantilena de todos los días: las provincias gastan demasiado.

He traído unas cifras de lo que informa el gobierno nacional, el Ministerio de Economía, con respecto a la evolución de los gastos. Es curioso, entre 1991 y 1995 —me cabe responsabilidad en esto— los recursos corrientes de la Nación se incrementaron en un 71 por ciento, y las jurisdicciones, en conjunto —las veinticuatro—, 74 por ciento. En mi provincia, como eliminamos una serie de impuestos para cumplir los pactos fiscales, sólo incrementamos el 28,6 por ciento.

Pero veamos qué pasó con las erogaciones corrientes. La Nación, en el mismo período, incrementó sus erogaciones corrientes en 79,9, casi el 80 por ciento, y el conjunto de las provincias, en 65 por ciento.

Con mi convicción de cumplir con los postulados de la reforma del Estado ajusté los gastos al máximo. Mi provincia incrementó sus erogaciones corrientes en 8,76 por ciento frente a 80 por ciento de los gastos de la Nación.

De manera que cuando hablo de estos temas lo hago con cierta responsabilidad y autoridad. Firmamos el Pacto Fiscal II el 12 de agosto de 1993; exactamente un año después del primero. El Pacto Fiscal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento contempla aspiraciones especialmente caras para mi provincia, en donde hoy la desocupación llega al 21 por ciento, en donde el ingreso per cápita es la mitad del promedio del país, en donde el crecimiento demográfico es el doble del promedio del país. Este creció el 16 por ciento entre los dos censos; mi provincia creció el 31 por ciento.

¿Cómo no íbamos a querer fomentar la producción, el empleo y el crecimiento? Nos comprometimos —así como el otro era esencialmente impositivo, éste fundamentalmente, de reforma del Estado— a derogar el impuesto a los sellos; en algunos casos, la derogación fue inmediata; en otros, había más plazo. A derogar el impuesto a los combustibles; también se derogó, o sea que cumplimos. A modificar el impuesto a los ingresos brutos; efectivamente, lo eliminamos para el agro, la minería, la construcción, para parte del turismo, tal como nos habíamos comprometido. A achicar el impuesto inmobiliario; también lo cumplimos, instando a los municipios —que escapan a nuestra jurisdicción— a que modificaran ciertas tasas que realmente se superponen con los tributos provinciales, como la tasa de actividades varias, que es la más importante para el municipio, difícil de reemplazar, o la tasa de ocupación del suelo, esto último reconozco que es un poco absurdo: se recarga el 10 por ciento sobre las tarifas del gas y el 4 por ciento sobre la energía por uso del espacio físico. Los municipios no cumplieron; no estaba en nuestras manos obligarlos.

La Nación también asumió importantes compromisos, como eliminar el impuesto a los activos afectados a la producción. Los eliminó, pero después puso el impuesto a los bienes personales; en realidad impuesto a los bienes personales que no participan del proceso productivo. Perfecto, pero después lo extendió a todos los bienes personales. Entonces ya el compromiso de eliminar el impuesto a los activos no se cumplió. Sólo cambió de nombre.

Es así que el que tiene un tractor, una pickup, un pedazo de tierra, cualquiera sea su dimensión, bienes incorporados al proceso productivo tienen que pagar este impuesto.

La Nación se comprometió a rebajar los aportes previsionales. ¿Cómo nuestra provincia no iba a querer rebajar los aportes previsionales, en un 70 por ciento en la ciudad de Salta y un 75

por ciento en el resto de ella! Esto, en provincias donde la mano de obra es intensiva, sobre todo para producciones hortícolas, tabacaleras, etcétera, es muy importante y se realizó. En cuanto a los aportes patronales, ello se concretó, pero llegó el efecto tequila y quedó eliminado; así pasamos muchos meses sin esta ventaja, que después se reincorpora, pero parcialmente.

Se hablaba de limitar el IVA al 18 por ciento. Poco tiempo después puso tres puntos más al IVA. Nuevamente fueron frustradas nuestras esperanzas.

Se establecieron las cédulas hipotecarias. Muy bien, apoyo estas cédulas hipotecarias. El proceso fue lento pero constituyó un elemento importante:

Transferencias a las cajas: fue algo importante que yo no pude aprovechar porque la Legislatura no estaba de acuerdo.

Se estableció la garantía de coparticipación en 740 millones y, en esas condiciones, prorrogamos el pacto al 30 de junio de 1995.

Quiero señalar que estos tres puntos del IVA constituían 1.800 millones, no sé si lo mencioné correctamente.

También, cuando se incorporaron los tres puntos del IVA se habló de la creación de un fondo fiduciario de 1.200 millones de pesos. Nadie sabe qué pasó con esos 1.200 millones de pesos porque el fondo fiduciario que nos dieron fue, por ejemplo, para privatizar los bancos y ciertas instituciones u organismos; lo otorgaron como crédito a devolver, no como un fondo fiduciario producido por este tres por ciento del IVA que, reitero, no nos llegó.

Hoy venimos nuevamente a tratar la prórroga del pacto fiscal, lo que significa postergar hasta 1999 la nueva ley de coparticipación que debe dictarse este año de acuerdo con la cláusula sexta transitoria de la Constitución y con su artículo 75. Este, realmente, es uno de los aspectos que más me preocupan.

Pero, además, estas leyes afectan al impuesto a los combustibles; está también el otro paquete, pero me voy a referir al de los combustibles.

De este impuesto se destinaba el 2 por ciento a Vialidad y el 42 por ciento al FONAVI. Ahora, esto se modifica partiendo de la base de que va a haber un aumento, teóricamente quedaría lo mismo.

Pero aquí, en el punto referido al impuesto al gas-oil, se dice —hasta donde tengo noticia, porque aquí no figura— que podrá ser compensado con ganancias.

¿Qué significa esto? Que el impuesto a los combustibles lo cobra la Nación para el destino —que es justo— de seguridad social; en cuanto a las ganancias habrá una disminución de la recaudación, pero este impuesto es coparticipable. Es decir: lo que recauda la Nación por impuesto a los combustibles después lo saca de la coparticipación y nosotros solventamos la diferencia.

Debo decir que, personalmente, tengo muchas dudas sobre esta compensación en cuanto a que sirva para algo, porque para compensar ganancias hay que tener ganancias. Y pienso que los pequeños productores, la pequeña y mediana empresa, no tienen ganancias como para compensar lo que se pagó de más por el gas-oil. Pero de cualquier manera, lo que compensemos, lo que las grandes empresas vayan a compensar, lo vamos a pagar las provincias porque en el futuro disminuye la masa de coparticipación.

Yo quisiera recordar cuál ha sido nuestra posición —la de mi partido y la mía, personalmente— en esta enorme tarea realizada por el gobierno de la Nación —lo debo reconocer— para transformar el Estado. Ha sido un decidido apoyo.

Recuerdo la ley de convertibilidad. Yo era presidente del bloque de partidos provinciales y teníamos 14 votos en el recinto. Ganamos la votación por 7 votos. Y así, en sucesivas iniciativas, estuvimos permanentemente apoyando este proyecto de transformación del Estado porque coincidía con nuestra filosofía. Pero, además, porque partíamos de la base de que el esfuerzo iba a ser parejo. Y no lo ha sido.

Apoyamos las privatizaciones y los pactos. Recuerdo las duras discusiones que tuve con mis colegas del justicialismo para apoyar el pacto, porque yo lo apoyaba mucho más que los propios justicialistas. Y lo hacía porque estaba convencido de que si la Nación cumplía, íbamos a sacar beneficios para nuestra gente, que es en definitiva lo que interesa.

Retrospectivamente veo las cosas de manera distinta. Analicemos el control del gasto público, por ejemplo. He señalado que el incremento en mi provincia ha sido del 8 y ~~8~~ 6 por ciento, frente al 80 por ciento en el orden nacional.

No fue fácil apoyar estas medidas. La oposición en Salta, que era y es el oficialismo en el gobierno nacional, me atacó duramente. Yo estaba convencido de que era necesario hacer este esfuerzo. Y duramente me decían una frase que, quizá, hoy debo reconocer que era cierta: "El gobernador acepta que la provincia esté a sueldo de la Nación. Va a recibir nada más que la ga-

rantía". Yo, ilusamente, decía que no. Y efectivamente tenían razón. Nos pusieron a sueldo y ahora se pretende volver a hacerlo hasta el '99.

Hay otra cuestión que me preocupa. Esto va a disminuir los recursos afectados. Eso significa que la única posibilidad de desarrollar la infraestructura de nuestras provincias es con los recursos afectados, con lo que recibe Vialidad en concepto de impuesto a los combustibles, con lo que recibe el FONAVI, con lo que recibe el FEDEI. Y esto, efectivamente, va a disminuir los recursos afectados porque va a disminuir la actividad económica y, por ende, la recaudación básica sin la modificación.

Además no nos engañemos: esta mayor carga impositiva va a seguir disminuyendo la actividad económica. Y esto significa que nuestros recursos tributarios provinciales, que son importantes, van a disminuir.

El pacto fiscal hablaba de una medida respecto de la cual tuve muchas dudas. Me refiero al impuesto a las ventas, que no se ha instrumentado por la sencilla razón de que las provincias consumidoras van a poder recaudar mucho impuesto y las productoras, como la mía, recaudarán poco. Pero al margen de eso, estas medidas van a disminuir la posibilidad de los recursos propios de la provincia. En efecto, vamos a disminuir nuestra propia capacidad de gestión, vamos a afectar el federalismo económico, que es el que pesa porque el político, gracias a una clase política luchadora que lo defiende, está asegurado, pero con estas medidas vamos a disminuir el federalismo económico.

Quiero señalar, además, que no he podido dejar de considerar otros aspectos de la cosa. Acá tengo el pronunciamiento, la declaración número 58 de la Cámara de Senadores de la provincia de Salta, integrada por veintiún senadores justicialistas y dos de mi partido, que dice: "Querría con agrado que los legisladores nacionales por la provincia de Salta, rechacen las medidas económicas dispuestas por el gobierno nacional el día 12 de agosto del corriente año, consistentes en la implementación de un tope de la coparticipación federal, el incremento del precio del gas-oil, la decisión de no coparticipar a las provincias los incrementos en la recaudación derivados de dichas medidas, o que afecten de un modo directo o indirecto la producción de bienes o servicios, sean causantes de recesión o desempleo, o en general afecten los intereses o derechos de la provincia de Salta".

Es una comunicación oficial, donde debo decir que la única voz discordante durante el de-

bate fue la de un senador de mi partido, que pidió que cambiaran la palabra "rechacen" porque consideraba que era agresiva. Por supuesto, esa sugerencia fue absolutamente desoída y se mantuvo la redacción.

Estas son las razones que doy, no me refiero a la última porque es anecdótica y si no estuviera respaldada por las otras no la mencionaría. Creo que los costos políticos hay que asumírselos y con responsabilidad, como lo hice cada vez que tuve que apoyar estas medidas.

No sólo voy a reiterar lo que dije acerca del 8 o del 9 por ciento de incremento en las erogaciones corrientes de mi provincia frente al 80 por ciento de la Nación, sino del incumplimiento de los compromisos concretos: lo del IVA y tantos otros que he mencionado y no quiero reiterar.

Esto me hace pensar que no es conducente volver a prorrogar este pacto, que hay que poner las cosas nuevamente en blanco y negro, que realmente tenemos que discutir una ley de coparticipación, que fue la gran esperanza de quienes vimos cómo se concretaba la reforma de la Constitución que la establecía expresamente. Incluso decía cuáles eran las pautas que debían regir esta ley para que haya igualdad de oportunidades en nuestra provincia.

Digo esto con inmensa preocupación y pensando que, además, el gobierno nacional está pasando por un momento muy difícil y que no acierta con el camino que lleve a la reactivación económica. Sé que esto es fácil decirlo y difícil cumplirlo. Pero estas medidas lo van a deprimir más aún. Me hubiera gustado que fuera acompañado por más medidas que concretaran esta reactivación que tanto necesitamos.

En mi provincia —quiero decirlo, y no es cinismo— estamos acostumbrados a tener pobres. Hoy tenemos un drama nuevo: los nuevos pobres; aquellos que podían vivir con humildad pero dignamente y que hoy se incorporan a la masa de carecientes.

Por estas razones, señor presidente, mi voto va a ser negativo para este proyecto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan, de la Cruzada Renovadora.

Sr. Avelín. — Brevemente adelanto mi voto negativo para este proyecto de ley. Daré alguna sugerencia con respecto al tema que es delicado, de mucha profundidad económica y gran sentido político.

Por supuesto, esto responde a un objetivo, que es el modelo socioeconómico que implementa y ha implementado este gobierno, que se

lleva a cabo con toda la fuerza a pesar de la gran oposición que existe.

Las observaciones son las siguientes, son tres puntos. En primer lugar, la actual Constitución Nacional establece que el Congreso debe dictar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, que entraría en vigencia el 1º de enero de 1997. El proyecto de ley, al prorrogar el pacto federal para el empleo, la producción y el crecimiento, pacto fiscal de 1993, contraviene ese mandato constitucional. Es una cuestión delicada, que puede traer muchos inconvenientes porque no se cumple con este ordenamiento constitucional.

En segundo término, el mensaje del Poder Ejecutivo no fundamenta, no dice el porqué de esta prórroga del pacto fiscal hasta el 31 de diciembre de 1998.

Finalmente, la suma que las provincias dejarían de percibir por coparticipar el impuesto a los combustibles sería mayor que los ingresos que les produciría el impuesto sobre los bienes personales —impuesto a la riqueza.

El problema de fondo es que esta medida de prórroga del pacto fiscal hasta 1998, así como el nuevo paquete de impuestos que está debatiéndose en la Cámara de Diputados —que hoy no se reunió— y el pedido de autorización de incremento de la deuda pública en 4 mil millones de pesos para el presente ejercicio, forman parte de las exigencias financieras impuestas a la Argentina por la banca acreedora, a través de las misión del Fondo Monetario Internacional que se encuentra en nuestro país.

Señor presidente: es indudable que las provincias atraviesan un momento muy difícil. Todo el interior de la República está angustiado, desesperado y sufriendo una gran marginación, porque no hay posibilidades de desarrollo, de valor agregado, de realizar una actividad productiva, una obra pública o montar una industria.

Es decir que vivimos totalmente angustiados y creo que todos los señores senadores, hasta incluso usted, señor presidente, que conoce el país, están de acuerdo con lo que digo y viven esta angustia tremenda que padecen muchos sectores y millones de argentinos.

En el corazón de los argentinos encontramos dos cosas. Por un lado, esperanza de que el país aflore y se proyecte y, por el otro —permítanme que utilice el término— mucha bronca, porque ven que cada día se les cierra el camino y no existe una luz que les permita divisar el desarrollo del país y el vuelo que debe tener cada una de las provincias.

En efecto, en lo económico andamos mal; en lo financiero estamos peor; y lo mismo ocurre en los planos de la educación, la salud y el trabajo. Es decir que la angustia es permanente.

Yo hubiera querido que se discutiera la coparticipación federal para entregar a las provincias un presupuesto acorde, que les permita tener vuelo propio, autodeterminación y poder crecer de la manera en que deben hacerlo, porque en el interior del país se encuentra la reserva económica, moral y espiritual que nos ayudará a salir de este atolladero, de esta encrucijada, de este encierro y de este túnel penetrante en el que estamos viviendo.

Hay mucha disconformidad. Pero cuánto quisiera que este gobierno triunfe, que este modelo dé sus frutos, que salgamos adelante y que proyectemos la Argentina de la esperanza y del primer mundo. Pero sucede que cuando hay hambre, indudablemente se producen enfrentamientos, hay violencia y descreimiento, se pierde la fe, se bajan los brazos y la rebeldía es tan penetrante, que puede llegar a suceder cualquier cosa en el país.

Por eso que habría sido muy interesante que hubiéramos debatido durante horas, incluso días, la coparticipación federal, para finalmente darle a cada provincia lo que le corresponde. Creo que habría que coparticipar todo lo que la Nación tenga para brindar a las provincias, a fin de que éstas cuenten con recursos que les permitan proyectar y desarrollar sus actividades.

Las importaciones indiscriminadas están eliminando nuestra materia prima, los elementos primarios, y ya no podemos competir en el mercado interno y menos en el internacional. Y ni hablar de la parte industrial, de valor agregado, porque ni siquiera tenemos tecnología apropiada para competir en el mercado externo.

De esta manera hay que oxigenar a las provincias e, incluso, hacer que esta torta que se reparte sea pequeña para la Nación y grande para las provincias. Ya verán que cuando se reviertan estas cosas y empiecen a florecer las provincias, todos vamos a estar felices, con esperanzas y tendremos un país realizado en toda su geografía. Pero desgraciadamente con este modelo socioeconómico, que está mandado y dirigido por las multinacionales y los países centrales, no vamos a poder salir de esta situación.

En efecto, día tras día aumentan los intereses y la deuda externa, a pesar de haber vendido, entregado y hasta regalado muchas cosas de nuestro patrimonio económico.

Por eso, creo que hay que cambiar este modelo y empezar a empujar en lo económico, en lo social, en lo espiritual y en lo cultural, para encontrar realmente un país conformado con sus propias aspiraciones.

El pueblo argentino tiene muchas aspiraciones y ganas de trabajar. Esto se puede advertir con solo hablar con nuestros obreros y trabajadores del campo y de zonas de frontera. Yo creo que todos los senadores aquí presentes habrán hablado permanentemente y sentido el reclamo de aquel sector constituido por millones de argentinos pidiendo trabajo, posibilidades, una apertura a sus propias aspiraciones, que no las encuentra. Con este modelo, indudablemente, nos vamos a ir sepultando día a día, lentamente, en una agonía que realmente puede llevar a una crisis muy desgraciada y a una situación insostenible para todos los argentinos.

Por todo ello, señor presidente, me voy a oponer a esta prórroga del Pacto Fiscal y me inclino más por abrir las puertas para que discutamos una coparticipación federal para que las provincias tengan lo que les corresponde y la Nación mucho menos, porque no merece tener todo lo que posee en desmedro de todas las provincias argentinas.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: este proyecto viene con un dictamen modificado a último momento, por el que se dispone básicamente prorrogar el plazo del cumplimiento de las obligaciones del Pacto Federal, las de carácter tributario asumido por las provincias cuando suscribieron en 1993 dicho pacto, hoy tantas veces mencionado.

Creo que se ha recordado parcialmente el camino que hemos recorrido hasta aquí. El 10 de julio de este año, el Congreso convirtió en ley la prórroga de la garantía de 740 millones de pesos, prevista en el punto 2º de la sección 8ª del Pacto Federal. En mayo, el Senado de la Nación había aprobado el dictamen del proyecto de ley que disponía la prórroga del Pacto Federal con efecto retroactivo al 1º de julio de 1995, hasta el 31 de diciembre del corriente año. Es de público conocimiento que la prórroga aludida no tuvo sanción por parte de la Cámara de Diputados, que a su vez había aprobado una iniciativa similar. Este proyecto que nos vino en revisión fue devuelto por nuestro cuerpo —sin que se lo tratara— a través de una resolución debidamente fundada en la sesión del 27 de marzo en la cual establecía que en razón de las facultades que

la Constitución le acuerda al Senado en su artículo 75, incisos 2º y 19, debía ser nuestro cuerpo la Cámara iniciadora en toda ley convenio que afectara regímenes de coparticipación.

Este es un tema que ha sido conflictivo —especialmente en los últimos tiempos— en las relaciones entre Nación y provincias, como lo han puesto de manifiesto algunas de las exposiciones anteriores, específicamente con su experiencia como gobernador de una provincia y habiendo tenido que soportar ese *via crucis*, el señor senador por Salta.

Conviene dejar sentado, porque tipifica un poco el camino que se ha recorrido —y que hoy nuevamente vamos a volver a incurrir— que desde la sanción de la ley de coparticipación federal 23.548, parte de los recursos asignados a las provincias ha ido disminuyendo significativa y progresivamente. Cuando se aprobó esa ley, de la masa de impuestos coparticipables se asignaba a las provincias un 54,66 por ciento. La situación hoy ha cambiado sustancialmente. Del total de masa coparticipable se han destinado sumas importantes para financiar programas o fondos específicos. Eso ha originado una importante reducción de la misma por lo que puede afirmarse que hoy las provincias reciben solamente un 38 por ciento frente a ese 54,66 por ciento original. Así, por ejemplo, un rápido análisis de los distintos impuestos nos lleva a recordar que el impuesto a las ganancias destina un 20 por ciento a la seguridad social, un 2 por ciento para los ATN, un 4 por ciento para las provincias —sin contar a Buenos Aires— y un 10 por ciento para el área del conurbano bonaerense, lo que lleva a la coparticipación bruta al 64 por ciento respecto del monto original.

Lo mismo sucede con el IVA; dado que del total de la masa coparticipable se destina un 11 por ciento a la seguridad social, por lo que se distribuye entre las distintas jurisdicciones un 89 por ciento del monto total.

De todas maneras se debe aclarar que del total de la coparticipación bruta —es decir, de la suma de todos los impuestos— se deduce un 15 por ciento adicional destinado a la seguridad social nacional.

Podría continuar con esta enumeración y analizando otros casos similares que muestran con claridad que, año tras año, las distintas jurisdicciones —y esto es lo que quiero enfatizar— ven reducirse los fondos que les corresponden en función de la coparticipación federal de im-

puestos, circunstancias que, de aprobarse este dictamen, se volverán a repetir.

¿Cómo se interpretan estas sucesivas reducciones de la masa de impuestos coparticipables a la luz de las economías provinciales? Tomemos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Si analizamos la recaudación correspondiente al primer trimestre de 1996, podremos observar que se recaudaron en ese período 1.583 millones de pesos, y se coparticipó un total de 1.013,2 millones, destinándose a las provincias un total de 555,81 millones. Esto significa que de la masa del impuesto sólo se distribuyó entre la Nación y las provincias un 64 por ciento del total recaudado, quedando sin coparticipar 569,9 millones que, como hemos visto, se destinan a fondos específicos y, por lo tanto, los pierden las distintas jurisdicciones.

Vale aclarar que en virtud de lo dispuesto en la ley 23.548, se debería haber coparticipado el total de lo recaudado, por lo que les correspondería a dichas jurisdicciones una suma de 865,32 millones de pesos.

¿Cuáles son los efectos que esto tiene sobre las provincias? Algunos oradores que me han precedido en el uso de la palabra ya lo han adelantado. Obviamente, el primer efecto es que las distintas jurisdicciones cuentan con una menor cantidad de recursos para sus diferentes gastos, lo cual atenta contra la actividad económica local y regional porque al ver reducidos sus ingresos el estado provincial, necesariamente, se ve afectado en aquellas actividades que debe desarrollar en áreas fundamentales e indelegables como la de la salud, la educación, la seguridad, incurriendo también en atrasos en el pago a sus acreedores, cosa que todos nosotros hemos sufrido y estamos viviendo actualmente como representantes de las provincias. Deja también de ejecutar obras públicas esenciales que quedan entonces como un catálogo de buenas intenciones e, incluso, llega a incumplir muchas veces obligaciones fundamentales como la de abonar puntualmente los sueldos de sus servidores, o debe recurrir directa, lisa y llanamente a una disminución de esos haberes.

Como muestra de estas afirmaciones quiero leer algunas expresiones que han aparecido en la publicación "Foro Empresario", que edita la Federación Económica de mi provincia. Puede observarse, en base a los datos obtenidos en la encuesta que se publica, que el 52 por ciento de los encuestados, correspondientes a 112 comercios y empresas de servicios representativas expresaban que sus ventas en junio fueron un 28 por ciento menores a las de mayo del mismo año.

Asimismo, se señala que en la provincia de Corrientes la recaudación del IVA se redujo un 37 por ciento cuando en todo el país, según informes del Ministerio de Economía de la Nación, había disminuido sólo un 12 por ciento.

Por lo tanto, en un clima netamente recesivo, como lo demuestran estas cifras que he traído y que afligen a mi provincia, se intenta someter ahora a las provincias a una reducción aún mayor en lo que respecta a los recursos coparticipables. Para ello, voy a comentar brevemente el informe que surge del dictamen finalmente modificado y que se encuentra a consideración de este cuerpo.

Según sabemos, a través del artículo 1º se prorroga el Pacto Federal para el Empleo hasta el 31 de diciembre de 1998. Es decir, se prorroga esta situación por dos años más. Es cierto que, entre otros aspectos, se mantiene la garantía de coparticipación para las provincias que es de 740 millones de pesos. Pero lo que importa —y esto también ha quedado explicitado en algunas manifestaciones de los señores senadores que me precedieron en el uso de la palabra— es que se llega a una solución de coyuntura en lugar de acometer lisa y llanamente la anunciada y prescripta obligación de llevar adelante una nueva, justa y necesaria distribución de impuestos que atienda a la necesidad de crecimiento del interior del país, que es su médula y no sólo la del rincón más privilegiado de la pampa húmeda. Así, se llega a una solución de coyuntura que es aceptada por la urgencia y desesperación de los fiscos provinciales. Reitero que ésta no es la solución final sino una salida de tipo coyuntural.

La situación planteada nos llevará a afrontar por dos períodos más esta farragosa combinación que año a año va degradando la coparticipación provincial en beneficio de fines que son loables —¿quién va a estar en desacuerdo con que se atiendan las jubilaciones u otros fines?—. Pero lo real es que mientras tanto en las provincias los problemas siguen existiendo y, lo que es peor aún, siguen creciendo, generando algunas nuevas categorías de pobres, como señalaba el señor senador por Salta.

Paso a analizar el artículo 2º. Según su texto, se destina al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones el 21 por ciento de lo que se recaude por aplicación de los gravámenes a las naftas, gasolina natural, solvente y aguarrás, entre otros. En el supuesto de que, como surge del inciso b) de este artículo, se decida gravar el gas oil, el Diesel oil, el kerosene y el gas natural comprimido —elementos que como sabemos estaban

exentos de la firma del decreto 2.021 de 1992—, se destinaría el total del producido de este último impuesto al mismo fin, o sea, al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Esto implica que se destinaría a la Nación, según las previsiones realizadas y en el supuesto de que el Congreso apruebe el nuevo pacto fiscal, aproximadamente 1.282,17 millones anuales, provenientes del impuesto a las naftas, solvente, gasolina natural y aguarrás, a lo que se agregarían cerca de 1.250 millones, producto del impuesto al gas oil, Diesel oil, kerosene y gas natural comprimido. O sea que lo que se estima recaudar en concepto de impuesto a los combustibles, al aprobarse el nuevo paquete fiscal, estaría próximo a los 4.160 millones anuales. De dicho monto se destinaría un 61 por ciento a la Nación, 16 por ciento a las provincias y 23 por ciento al FONAVI, en contraposición con los porcentajes actuales, que son el 29 por ciento para el Tesoro nacional, el 29 por ciento para las provincias y el 42 por ciento para el FONAVI, según lo estipulado en la ley 23.966.

Resulta claro el perjuicio que ocasionará a los fiscos provinciales la aplicación de este artículo, ya que de las planillas fiscales existentes se deduce que las distintas jurisdicciones dejarían de percibir 1.287,37 millones anuales por el impuesto a los combustibles si se aplica tal como está el artículo 2º, por supuesto siempre y cuando el Congreso Nacional apruebe la modificación del régimen tributario.

Con relación al artículo 3º podría expresarse la misma objeción. El impuesto que gravare a los automotores, chasis con motor y motores de tales vehículos que utilicen como combustible gas oil, si es aprobado por el Congreso, se destinará a financiar el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones hasta el 31 de diciembre de 1998. Este impuesto que se recaudaría en todo el país sin embargo se destinaría exclusivamente al pago de las jubilaciones nacionales, que en un 70 por ciento están concentradas en el área de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, con lo cual nuevamente van a transferirse recursos hacia los centros de mayor consumo y actividad económica, algo verdaderamente distante del estricto concepto de lo que es la solidaridad federal.

Respecto del artículo 4º del dictamen, quisiera hacer algunos comentarios que considero de importancia. Como se sabe, hasta ahora el impuesto a los bienes personales se distribuye en un 90 por ciento a la seguridad social nacional y un 10 por ciento para la seguridad social de los

municipios y las provincias. La modificación que se propone es que las provincias coparticipen en un 100 por ciento del impuesto a los bienes personales. Pero queda la duda sobre el resultado final al suprimirse ese techo o piso de garantía de 700 millones de pesos a los que se refería en su exposición el señor senador Genoud.

Asimismo, en el proyecto de modificación al dictamen de la comisión que obra en mi poder, se agrega un nuevo artículo —el 5º— por el cual se destinarían a las provincias la suma de 440 millones de pesos anuales en función de lo dispuesto por los artículos 3º y 4º de la ley 23.548.

Considero que esta asignación compensaría parte de los recursos que las provincias perderían en base a la distribución que se estipula en el artículo 2º de este dictamen. Es por ello que los 740 millones de pesos que se destinarían a las provincias en virtud de las modificaciones propuestas podrán acercar algunos recursos a las exhaustas arcas provinciales. De todas formas, en base a este proyecto que se propone aprobar, perderían finalmente cerca de 600 millones de pesos anuales en concepto de impuestos coparticipables.

Para finalizar, no puedo dejar de referirme a algunas consideraciones generales que estimo de vital importancia. La posibilidad de gravar el consumo de gas oil afectará fundamentalmente a la actividad agropecuaria. Esta medida va a repercutir en forma especial en la labor del campo que es fundamental en la economía de la mayor parte de nuestras provincias.

Además, nuevamente se genera un flujo de recursos desde el interior hacia los centros poblados, con lo cual la actividad productiva sufrirá una nueva y muy peligrosa carga que complicará aún más la lucha por la subsistencia en un marco que hoy es netamente recesivo.

Pareciera que este paquete busca solucionar urgentemente una situación de coyuntura. No tiene la mirada hacia más allá. Vamos a salir del momento, pero a costa de muy serios interrogantes que, indiscutiblemente, afligen al conjunto de los productores nacionales. Y afligen porque no parece que con estas medidas vayamos a acercar soluciones al desempleo y a la recesión y a llegar a la médula del problema que, en este momento, está en nuestras manos: disminuir en alguna forma el gasto público.

Cuando destaco algunos de los problemas — como los que acabo de mencionar — que a todos nos afligen, creo que algún derecho tengo para hacerlo. Les consta a mis colegas y a la opinión pública que, salvo algunos casos de privatiza-

ciones intentadas como las de Correos y de Yacaré, he acompañado en general todas las que fueron proyectadas, a fin de facilitar una desregulación económica que he compartido y comparto como objetivo, también a fin de impulsar a través de tales privatizaciones la actividad privada y, asimismo, contribuir al equilibrio presupuestario liberando al Estado de esa carga realmente ominosa que significaban los voluminosos y persistentes déficit en las empresas estatales.

El camino fue recorrido con el convencimiento de que era el adecuado para conseguir el objetivo de erradicar la inflación e impulsar la actividad económica individual en beneficio de la economía general. Algunos de estos objetivos ya conseguidos —como el de la estabilidad— creo que están asumidos por todos como un beneficio que debemos cuidar. Otros objetivos, en cambio, no han funcionado, seguramente por fallas de ejecución o por no haberse tomado las medidas que hoy aparecen imprescindibles para afrontar un enorme déficit fiscal antes no difundido suficientemente y no percibido —por lo menos hasta hoy— en su verdadera magnitud.

Estos problemas no son solamente del gobierno sino que tenemos la obligación de afrontar los todos. La gravedad del momento no debe permitirnos o impulsarnos a hacer de él cosecha política. Por ello, debemos tratar estos temas con un sentido de responsabilidad ajena a sectarismos.

La necesidad del equilibrio presupuestario debe impulsarnos, esencialmente, a bajar los gastos estatales y no confiar en soluciones que agraven con un aumento desmesurado de impuestos la capacidad productiva del país, hoy fuertemente azotada.

El punto medio debe darnos el escuchar los intereses comprometidos y las urgencias del Estado, repartiendo cargas en uno y otro lado y, asimismo, evitando un peligroso camino de recesión que ahogue el ánimo de los productores.

Con este espíritu y comprometiendo mi aporte por el desarrollo y crecimiento nacionales, adelanto mi voto afirmativo en general a este proyecto de prórroga del pacto federal, sin perjuicio de las críticas que he mencionado en esta exposición. Votaré en desacuerdo con los artículos 2º y 3º. Todo ello ratificando mi decepción de que nuevamente se posterga una distribución más equitativa entre la Nación y las provincias en un nuevo régimen de coparticipación cuya discusión, nuevamente, se dilata.

Voto afirmativamente en general, como muchos, porque recojo la desesperación financiera

de las provincias. Pero otra vez cedemos a la coyuntura y postergamos una solución permanente y justiciera.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires de la Unión Cívica Radical.

Sr. Moreau. — Señor presidente: en primer lugar, hay que decir que el ser humano moviliza sus fantasías en muchas direcciones. En general, uno de los sueños que tiene es distribuir riquezas que no posee. Esto ocurre sobre todo cuando los juegos de azar se acumulan y aumentan la fantasía popular. Es común que se piense qué se haría si se tuviese el billete premiado o se obtuviera el número de puntos necesario para llevarse el pozo mayor.

Hoy el Senado de la Nación ha sobrepasado ese juego fantasioso de la mente humana y tiene la posibilidad de cumplir con ese sueño, ya que estamos distribuyendo lo que no tenemos. Efectivamente, no contamos con los montos que han dado origen a la elaboración del dictamen que estamos tratando. Pero lo más grave aún es que todos tenemos noticias de que la Cámara de Diputados, que tenía que tratar el llamado paquete impositivo —íntimamente conectado con el tema que tenemos en consideración— lamentablemente no ha reunido el número suficiente para aprobar la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Como todos conocemos la vida parlamentaria, sus vericuetos y el espacio que ella les da a las negociaciones transparentes, públicas y absolutamente legítimas entre los distintos bloques, la primera pregunta que surge es la siguiente: si el oficialismo en la Cámara de Diputados ha tenido alguna dificultad para formar quórum, lo que puede agravarse cuando tenga que reunir los 130 votos afirmativos, ¿no será posible que en la práctica este proyecto impositivo del Poder Ejecutivo sea modificado y que, por ejemplo, los partidos provinciales reclamen o demanden algún cambio y esa modificación en el *quantum*, por lo tanto, termine haciendo inútil la sanción que hoy se va a dar al pacto fiscal en este cuerpo y la tengamos que rever?

Me parece que desde el punto de vista de la seriedad de este Senado, que tiene un merecido prestigio, sería importante tomar en cuenta estas consideraciones y suspender este debate hasta la semana que viene para que efectivamente no se nos presente sorpresivamente y de manera legítima —lo quiero subrayar— la posibilidad de que se modifiquen algunas de estas circunstancias para obtener el quórum o el número de votos afirmativos necesarios para que la sanción

de Diputados pase a la Cámara de Senadores y todo lo que hagamos hoy, como ya ha ocurrido con algunos otros temas que este cuerpo ha sancionado muy recientemente, no termine colocándonos en la obligación de dar marcha atrás y haciendo que quedemos todos desairados, no sólo quienes voten por la afirmativa —no va a ser nuestro caso— sino la Cámara en su conjunto como órgano de la República y, fundamentalmente, como expresión federal del país.

De todas maneras, no aliento demasiado optimismo acerca de que esto que es pura sensatez sea asumido por el bloque del oficialismo, que parece tener la obligación, sobre todo en este Senado, de dar señales muy fuertes de que el poder del gobierno sigue intacto. Me parece legítimo que el oficialismo actúe de esa manera —nosotros cuando lo éramos también lo hacíamos en la misma dirección—, pero lo cierto es que ese pragmatismo tiene el límite del sentido común y de la razonabilidad.

Creo, efectivamente, que hacemos muy mal en continuar con esta discusión de distribuir lo que no tenemos, presumiendo que vamos a tener lo que tal vez la semana que viene no tengamos concretamente.

Porque una muy pequeña modificación en alguna alícuota o alguna circunstancia de ese tipo puede traernos dolores de cabeza, si hoy se da sanción a esta iniciativa.

En cuanto al fondo de la cuestión —seguramente reiteraré esta solicitud al finalizar mi exposición—, sin sobreabundar en los contundentes argumentos que ya dio el presidente de nuestro bloque, queremos señalar que mantenemos esta discusión en un escenario de coyuntura económica caracterizado por la incertidumbre que se origina en el déficit fiscal, la meseta en la que está colocada la economía argentina y las altísimas tasas de desempleo.

Frente a estas circunstancias, la nueva gestión económica en esta etapa del gobierno del doctor Menem se ha concentrado en el problema del déficit fiscal.

A partir de la decisión de poner allí todas sus energías sin atender las otras dificultades que, en definitiva, son las únicas que a la postre podrían llevar al país a superar las dificultades fiscales a partir de una reactivación del proceso productivo en la Nación —además de superar las dificultades sociales originadas en la alta tasa de desempleo—, la nueva conducción diseñó el conjunto de propuestas que hoy le está formulando al Parlamento argentino con el objetivo de superar, desde el punto de vista de las cuentas

públicas, una herencia que según el nuevo ministro de Economía compromete en una suma de alrededor de 6.600 millones de dólares las cuentas del Estado nacional.

Digo “según el nuevo ministro de Economía” porque tal como lo reclamamos también al inicio de esta sesión —en una expresión de sentido común y sensatez—, estamos discutiendo también la posibilidad de elevar impuestos y, a su vez, distribuirlos sin saber exactamente sobre qué déficit fiscal se está trabajando.

El ex ministro de Economía afirma exactamente lo contrario: que el déficit fiscal no es el que actualmente se está denunciando —por decirlo de alguna manera—, sino que es menor.

Esto en consonancia con lo que sostuvo acá el doctor Cavallo cuando estuvo sentado hace un tiempo, reclamando a este Parlamento que redujéramos las alícuotas sobre bienes suntuarios o sobre bebidas cola; esto fue no hace más de dos o tres meses. No estoy hablando de hace dos o tres años y mucho menos de hace veinte o treinta años.

En esa ocasión señalaba el ex ministro que dicha reducción en las alícuotas no causaba demasiado perjuicio a las cuentas públicas que, según él, estaban bastante saneadas, a pesar de que en esa interpelación le señalé que el déficit fiscal era del orden de los 500 millones de pesos mensuales, lo cual equivale a decir 6 mil millones al año, cifra que se parece bastante a la que finalmente el ministro Fernández está desparramando por allí, no solamente en el país sino también frente a los organismos internacionales de crédito.

En aquel momento, el oficialismo también acompañó esa decisión. Poco tiempo después tuvo que acompañar los decretos de necesidad y urgencia que establecían —y están todavía vigentes, por otra parte, porque no ha habido velocidad en rectificar esa decisión— la reducción de los salarios de los trabajadores.

Ya no se discutía si le íbamos a reducir los impuestos a la Coca-Cola sino cuánta plata le íbamos a sacar al que trabaja, entre otras cosas, para compensar el desaguado de ese señor ex ministro que nos decía aquí, mediante una pantalla instalada en el recinto, que todo estaba muy bien, que nos encontrábamos en la reactivación y que había que alentar o empujar esa reactivación con la reducción de las alícuotas a las alfombras, tapices, champagne, bebidas cola, etcétera, en una demostración más de la desorientación absoluta que tiene este gobierno en materia de política económica.

Dicha desorientación hoy se ratifica con esta discusión según la cual, reitero, se está pretendiendo distribuir bienes que ni siquiera tenemos en nuestro poder y que vaya a saber cuántas semanas —tal vez— le va a costar al Parlamento argentino conseguir en términos concretos y no en los papeles.

Porque por más que nos reunamos con las misiones del Fondo Monetario Internacional, por más que algunos titulares de organismos internacionales de crédito, como Enrique Iglesias, anuncien respaldos que, en definitiva, algunas veces llegan y otras no, lo cierto es que más allá incluso del propio esfuerzo que ha hecho el presidente de la Nación en Olivos, hoy no hubo número en la Cámara de Diputados.

Y esto genera una incertidumbre muy importante, a la que obviamente nosotros no podemos ser ajenos, que recae sobre esta cuestión que estamos discutiendo.

Se trata de una situación que pretende cerrar un bache para este año, que ya está definitivamente jugado, más allá de cuál sea la cifra definitiva: la de Cavallo, la de Fernández o la que muy modestamente nosotros podemos estar manejando, que tal vez no coincida con ninguna de las otras dos.

Creemos que la estimación de Cavallo es demasiado optimista y entendemos que él quiera diluir su responsabilidad sobre el desastre que le dejó a la Argentina. La estimación de Fernández también es optimista. Le quitamos el "demasiado" y decimos que, lamentablemente, como estamos hablando de estimaciones al cierre del ejercicio, probablemente esa cifra de déficit se acerque más a superar los 7 mil millones que a estar por debajo de ese monto.

Nadie ha medido el impacto —y es muy difícil hacerlo— que tiene la transferencia de las cajas de jubilaciones provinciales en relación con la cuestión del déficit previsional, pero no solamente en la transferencia del déficit de las provincias en términos aritméticos, sino en el impacto que tiene la fuga de afiliados hacia el sistema de las A.F.J.P., que viene de la mano de esto y que está en plena vigencia en la medida en que se van transfiriendo esas cajas.

El mismo impacto que tuvo —por supuesto en magnitudes menores, porque estamos hablando de menos gente—, para que se construyera este déficit, la fuga que se produjo hacia ese sistema privado de los beneficiarios del sistema jubilatorio que dejaron el sistema de reparto y pasaron al sector privado, que es lo que entre otras cosas contribuyó a dar como resultado este déficit,

según Fernández, de 6.600 millones y, según Cavallo, de 3.500. Alguna vez sabremos cuál es la verdad.

Entonces, estamos frente a una decisión muy de coyuntura, que vaya a saber cómo resulta en términos de recaudación en lo que resta del año, con medidas de carácter evidentemente recesivo, tal como es admitido por todos los sectores.

Estamos poniendo así un palo más en la rueda de un proceso productivo que viene detenido desde hace mucho tiempo. Porque es cierto que en este segundo trimestre han habido algunos síntomas de reactivación, como también no es menos cierto que en el primer trimestre la producción se mantuvo en niveles muy bajos. También es cierto que en el tercer trimestre, por el cambio de expectativas, pareciera que esos primeros síntomas de reactivación tienden nuevamente a apagarse.

Creo que este paquetazo no va a hacer más que contribuir a que efectivamente la economía argentina, tal como viene ocurriendo ya desde hace mucho tiempo, se mantenga en una meseta, no haya tal reactivación y, por supuesto, de ninguna manera se vuelvan a alcanzar los niveles de actividad que había en el '94, que ni siquiera en este segundo trimestre, a pesar de algunos síntomas de reactivación, se han alcanzado. Sigue estando muy por debajo del '94 incluso, la distribución del ingreso *per capita*. En fin, cualquier variable que uno analice está muy por debajo de las de ese año.

Estas decisiones que hoy se adoptarán, que están en consonancia con las peticiones que se están haciendo en diputados en materia de aumentos tributarios, no harán más que poner una plomada en la actividad productiva.

Es evidente que el nuevo equipo económico ha decidido apostar al factor vinculado a la exportación, deprimiendo totalmente el mercado interno. Piensa que esto puede ser una locomotora de una reactivación que se anuncia pero que nunca llega. Resulta muy difícil creer que esto sea posible en el marco de la situación en que ha quedado la economía argentina después de la gestión del señor Cavallo, que ha desarmado al país en cuanto a cualquier posibilidad de competir exitosamente en los mercados internacionales y, además, porque seguimos teniendo un corsé que asfixia al proceso productivo en la Argentina.

¿Cuál es el arma secreta que le queda al gobierno, independientemente de este desaguisado que está haciendo con el Pacto Fiscal que distribuye lo que todavía no tenemos y no sa-

bemos cuándo lo vamos a tener? La flexibilización laboral, que será un tema que en cualquier momento caerá por aquí y que tiene como objetivos, según la visión oficial, reducir costos y reactivar el empleo, cosa que está por probarse. En realidad, pareciera que va a producir el efecto exactamente inverso.

Para el año que viene estas previsiones fiscales pretenden reducir el déficit, según el ministro Fernández, a un equivalente del uno por ciento del producto bruto interno. Lo cierto es que, por más que uno ponga la mejor buena voluntad en hacer las cuentas y acepte las predicciones más optimistas en materia de recaudación, resulta muy difícil coincidir con ese pronóstico, por lo menos seriamente.

El cuadro recesivo que está viviendo la economía no permite alentar esa expectativa. Creo que, en las mejores condiciones, vamos a andar en un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares y no en uno de 3.000 y pico, que sería el equivalente al uno por ciento del PBI.

Pero esto se conecta, además, con un problema muy serio que tiene la Argentina, entre otras cosas, también gracias a la herencia, tal vez en este aspecto la más gravosa, que dejó la gestión Cavallo, que fue el ingreso al Brady en las condiciones que el gobierno argentino aceptó. En efecto, el año que viene tenemos compromisos muy serios desde el punto de vista externo —tremendamente serios— que hacen que podamos sumar esos 5.000 millones de nuestra estimación a los vencimientos de capital, que están ubicados en alrededor de 12.400 millones de pesos, incluyendo un stock de letras de Tesorería de 2.300 millones de pesos que va venciendo a fines de 1996.

Esto, entonces, nos haría llegar al año que viene con una necesidad de financiamiento de, aproximadamente, para redondear, señor presidente, 18.000 millones de dólares.

Esto es lo que no tiene respuesta. No tiene respuesta, obviamente, con este "paquetazo" que se está considerando en el Parlamento argentino y tampoco tiene respuesta desde el punto de vista de este llamado Pacto Fiscal que, en todo caso, está distribuyendo —en perspectiva del futuro que tiene la Argentina— nada más que miseria, como ya ha ocurrido con los pactos fiscales anteriores.

El señor presidente de nuestra bancada hizo una exacta descripción del significado que han tenido para las provincias los sucesivos pactos fiscales y el abandonar el terreno de la discusión

sería de un nuevo régimen de coparticipación federal.

Lo cierto es que las provincias vienen perdiendo.

Todavía recordamos el esfuerzo que tuvo que hacer el oficialismo con sus gobernadores y con los de otros partidos opositores para hacer aquella famosa quita del 15 por ciento, que iba a ir con destino al sistema de jubilaciones y pensiones. Esto es algo que las provincias cedieron un poco chantajeadas por la realidad de aquel momento y en otro sentido, por qué no decirlo, por un principio general de solidaridad y que durante un año y medio —mejor dicho, durante mucho tiempo; incluso hasta hoy— significó un decaimiento tremendo en la calidad de la prestación de servicios en las provincias y en los salarios de médicos, paramédicos, agentes de seguridad y empleados públicos en general.

Esto fue así porque, además, coincidió justo en el tiempo con la transferencia de servicios que se hizo hacia las provincias. Lo cierto es que todo terminó en una causa judicial que se está sustanciando en el juzgado del doctor Bonadío. ¿Por qué? Porque el ex ministro Cavallo hizo, en nuestra apreciación, malversación de esos fondos de las provincias, ya que los destinó a fines distintos de los que estaban previsto en la cesión que se hizo. Después lo quiso corregir con un decreto de efecto posterior, lo que también llevó a discutir en sede judicial si ha habido alteración de documento público o, mejor dicho, modificación de un documento público o no.

Para terminar, señor presidente, porque no queremos abundar en datos de macroeconomía, reiteramos nuestro llamado a la sensatez. El Senado sancionó hace poco la concesión de Yacyretá. El presidente públicamente ha dicho que esto queda congelado hasta que el Parlamento paraguayo actúe en consonancia.

Hoy el cuerpo se dispone a sancionar este Pacto Fiscal. Solicitamos que este tema sea pospuesto hasta el momento en que la Cámara de Diputados considere los *quantum* que nos permitan discutir con mayor seriedad, y sin generar tantas incertidumbres, estos porcentajes que se podrían ver modificados.

Al margen de las críticas que nos pueda merecer en particular la iniciativa, ya hemos señalado a la comisión algunas cuestiones en orden a mejorar las garantías de las que las provincias pueden gozar con respecto a una recaudación de carácter incierto hasta que no se apruebe ese paquete impositivo.

Sabemos que la comisión tiene la mejor buena voluntad para receptar algunas de las peticiones que vamos a formular para otorgar mayores garantías a las provincias. Estamos haciendo circular un texto en ese sentido. Es evidente que en este cuerpo, que representa los intereses federales de la Nación, no hay una divisoria entre oficialismo y oposición. Todos estamos trabajando, más allá de cuál sea el destino final de esta cuestión, para que esto, que a nuestro juicio resulta incierto y magro, se garantice efectivamente a las provincias, de forma tal que no ocurra lo que sucedió con otras cláusulas que supuestamente otorgaban ciertas garantías. Me refiero a aquellas que el ex ministro Cavallo impulsaba con la anualización de las garantías mínimas que terminaban en la práctica con retrasos en los pagos, que después se pretendían compensar cuando finalizaba el ejercicio con pagos semestrales, o cosas por el estilo.

Sabemos que en oportunidad de la discusión en particular vamos a encontrar por parte del oficialismo la mejor predisposición en esta materia, cosa que también hubiéramos querido encontrar con respecto a la Capital Federal que, por las circunstancias que hacen a las limitaciones que impone la ley 23.548, que no contempla los intereses de la Capital en esta materia, tal vez no pueda encajar en esto. De todos modos, queremos dejar sentada nuestra petición —por lo menos desde el punto de vista de un reclamo de principios— en el sentido de que habría que hacer un esfuerzo para que la Capital reciba un tratamiento similar al que recibió oportunamente Tierra del Fuego.

Del mismo modo quisiéramos sentar el precedente de que haya mayor transparencia o —si usted quiere, señor presidente, para no utilizar esta expresión que puede resultar irritativa— mayor equidad en el manejo de los A.T.N., que vemos que se incrementan y que tal vez estén orientados a compensar diferencias que ha habido en este manejo.

Todos sabemos que hay algunas provincias que se benefician muy particularmente con eso y otras, como las patagónicas, que han tenido cierta dificultad. Lo cierto es que la herencia recibida por el nuevo jefe de gobierno de la Capital Federal nos debe llamar la atención sobre este tema, porque así como el bloque oficialista al principio de esta sesión quería hacer alguna referencia a las decisiones que está tomando la Convención Estatuyente en la Capital, habría que hacer también algunas menciones a la situación financiera del distrito y ver si podemos con-

tribuir desde el Senado no a castigar a los estatuyentes que están desarrollando su labor sobre la base de una decisión soberana del pueblo de la Capital, sino a corregir el tremendo déficit heredado de la gestión de Domínguez en la Capital, más el déficit de caja que aún es más serio que el déficit estructural de dicho municipio.

Deberíamos ver si desde este Senado, más allá de preocuparnos por los aspectos institucionales, nos ocupamos también de la calidad de vida de la gente de la Capital que, como consecuencia de la aplicación de esta política económica, aunque parezca mentira, también está bastante deteriorada, a pesar de que en algún momento alguien pensó que podía ser Bélgica dentro del Congo.

En el marco de esta situación, señor presidente, reiteramos la necesidad de que se postergue el tratamiento de este tema. Si esta idea no prospera, en el tratamiento en particular vamos a hacer algunas sugerencias que tiendan a garantizar mejor los intereses de las provincias.

Sr. Presidente — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz.

Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: cuando terminó, en Santa Fe, la Convención Constituyente, allá por 1994, me preguntaron cuál me parecía el más importante de todos los temas que habían sido incluidos en la reforma constitucional. Había muchos constituyentes que creían que la inclusión de la figura del ministro coordinador, y de derechos y garantías constituía la parte más importante de aquella reforma. Pero yo siempre contesté, sin el más mínimo atisbo de duda, que lo más importante que habíamos discutido en Santa Fe era el régimen de coparticipación federal. No por una visión meramente economicista de la cuestión. La coparticipación suena a fondos distribuidos entre las provincias, suena a dinero. Pero una ley de coparticipación es algo más, es mucho más que esto, es la discusión de un modelo de país, señor presidente. Porque, en definitiva, así como cuando se discute un sistema tributario estamos discutiendo qué modelo de sociedad queremos, qué cosmovisión de la sociedad y de la gente tenemos, cuando se discute el régimen de coparticipación federal estamos discutiendo qué modelo de país queremos, cómo se va a distribuir el ingreso, si vamos a seguir con el viejo modelo del país centrado aquí, en el puerto, en la región central o vamos a imaginar los argentinos, sin distinción de ideologías ni partidos, que es posible, pero que, además de posible, es necesario, discutir un modelo de país diferente.

Por eso siempre dije que la inclusión del régimen de coparticipación federal había sido, a mi criterio, lo más importante que habíamos incorporado en la Constitución. Y había dos elementos fundamentales. Uno era de carácter temporal: fijábamos fecha a la entrada en vigencia de la nueva ley de coparticipación; debía ser a partir del 1º de enero de 1997. Tenía que ver con todo lo que veníamos discutiendo, con la transformación del país, porque las transformaciones siempre deben ser orientadas hacia un lugar. Y hemos sido contestes con la transformación que había sido encarada para reducir, fundamentalmente, a un Estado que en su modo de gestión había terminado generando una estructura elefantiásica que se devoraba a sus propios hijos.

Y decía, entonces, señor presidente, que dos eran las cuestiones referidas a este régimen importante. La primera era la que acabo de señalar. Y la otra, la que considero un logro muy importante, es que fuera el Senado el lugar en que se iniciara la discusión de la coparticipación. ¿Por qué? Porque quienes provenimos de provincias muy chiquitas, sabemos que éstas cuentan con muy pocos representantes en la Cámara de Diputados y que, cuando comienza la puja de intereses, nos sobrepasan los representantes del centro del país, desarrollado, concentrado en riqueza, en decisión política. Decía, entonces, que era muy importante que estuviera ubicado precisamente aquí, en el Senado de la Nación, el lugar donde se iniciara la discusión de la coparticipación, porque aquí todas las provincias somos iguales, o al menos lo parecemos.

Este dictamen, que hoy estamos abordando, viene a constituir por sobre todas las cosas una gran frustración de lo que habíamos imaginado en esos tres meses los hombres y mujeres del interior del país, sin distinción de pertenencia partidaria o ideológica. Este dictamen debe ser abordado desde una doble perspectiva. Por un lado, desde la relación fiscal entre Nación y provincias y, por el otro, como medida integrante de un paquete que, según lo informó la conducción económica, viene a paliar el déficit fiscal.

Siempre digo que, por sobre todas las cosas, las medidas que toma el Estado, las medidas del príncipe, deben ser equitativas y razonables. Sin embargo, acá estamos frente a un despacho que frustra aquella esperanza abrigada en Santa Fe, consagrada en la letra de la Constitución, porque va de suyo que a partir del 1º de enero de 1997 no habrá una nueva ley de coparticipación y porque, además, es justamente el Senado de la Nación quien declara que esto no será así y

quien resuelve, por si esto fuera poco, la no coparticipación en el aumento de impuestos que, como señalaron varios de los señores senadores preopinantes, ni siquiera se han creado.

Entonces, como se puede apreciar, este despacho no tiene nada que ver con aquella reforma constitucional ni con la racionalidad o la sensatez.

¿Por qué digo esto? El primer abordaje del tema lo haré a través de la relación fiscal entre Nación y provincias. En este sentido, las provincias patagónicas no sólo sufren una pérdida por los índices que en este régimen se coparticipan de los impuestos por combustibles, Fondo de Desarrollo Eléctrico, FONAVI y Fondo de Infraestructura Provincial sino porque en virtud de las regalías que se liquidaban cuando se discutió la Ley de Coparticipación Federal —que eran muy importantes, aunque nunca se llegó a los niveles de 1986—, se cedieron puntos de coparticipación. Es decir que hay una doble pérdida.

Asimismo, existe un perjuicio, porque estamos cambiando la coparticipación del impuesto a los combustibles, que es de fácil percepción, casi imposible de evitar, por la de gravámenes directos, de rentas personales, de ganancias y de bienes personales, que son de muy difícil recaudación, tal como quedó evidenciado en la práctica cuando vimos que con sugestiva y sospechosa prontitud algunos grupos económicos accedieron a cambiar el impuesto a los bienes personales por el de ganancias. Cualquier tributarista advierte el porqué de esta cuestión.

Las provincias, señor presidente, venimos cediendo desde hace mucho tiempo. Estamos sosteniendo el régimen previsional con aquel famoso 15 por ciento de ganancias. Asimismo, a pesar de la transferencia que se nos hizo de los servicios educativos y de salud, que están directamente vinculados con la calidad de vida de la gente, hemos mejorado nuestras administraciones.

Y esto tiene que ver con la segunda cuestión que mencioné, es decir, cómo se analiza esta medida dentro de este paquete, que nos dicen que servirá para bajar ese déficit fiscal que tanto Cavallo como Roque Fernández nos dijeron aquí que se debía a dos causas fundamentales: la primera, a que se había gastado más de lo previsto, o sea que se había ejecutado más de lo presupuestado, y la segunda, al altísimo grado de evasión.

Ahora bien, señor presidente, qué curioso que resulta esto, porque en definitiva si se gastó mal o más de lo presupuestado es responsabilidad de los funcionarios del gobierno nacional,

que no han ejecutado o presupuestado como era correcto. Por otro lado, los que no pagan impuestos, es decir, los que tienen capacidad contributiva, quienes tienen en la sociedad y han resultado ganadores en el modelo y que tampoco contribuyen. Y, entonces, las provincias que habíamos sido convencidas de la necesidad de reducir nuestros gastos y adecuar nuestros presupuestos y la gente que viene aportando —desde el inicio— al modelo de transformación, somos los que tenemos que hacernos cargo de que no se gaste bien en la Nación y de que los que tienen plata no paguen los impuestos. No estoy hablando desde el dogma ni desde la historia y de ninguna doctrina. Estoy hablando de la más absoluta racionalidad. Se tienen que hacer cargo de los platos rotos los que no los rompieron: las provincias. Pero no solamente por vía de este régimen de coparticipación, sino también por otras vías que forman parte del paquete de medidas económicas.

Recién decía el senador que me antecedió en el uso de la palabra que nos habían planteado el tema del modelo exportador y que esto se hacía para exportar. Voy a discernir con él, porque hay numerosas medidas también en el paquete económico que no tienen absolutamente nada que ver con la exportación. Es más, los que creímos que no era necesario apostar al mercado interno en el viejo modelo de sustitución de importaciones, donde el peronismo había situado el eje de su historia, que había venido una nueva época y apostábamos a la exportación, seguimos haciendo cosas para la exportación. En mi provincia, con fondos absolutamente provinciales, estamos construyendo un puerto en Caleta Olivia, que es un modelo único en toda Latinoamérica. Apostamos a la exportación, creíamos que ésta era la salida. Parte de este paquete económico consiste en derogar los reembolsos y reintegros por puertos patagónicos. ¡Qué idiotas, señor presidente! Creímos que había que ajustar y que había que hacer un modelo más eficiente del Estado. En mi provincia redujimos sueldos. Cuando ni siquiera se decía esto en el país, lo hicimos allá, en diciembre de 1991. Y además, estamos construyendo para ese modelo exportador en el que creímos, y ahora nos quitan los reembolsos de puertos patagónicos. Posiblemente estemos haciendo un puerto, pero no sabemos para qué cosas, porque creímos en las reglas de juego. ¡Qué estúpidos! Tienen razón algunos cuando nos tratan de estúpidos. Pero no por opositores sino porque realmente somos estúpidos. Creímos en las reglas de juego que se habían impuesto.

Primero quería hacer estas observaciones que eran de carácter estrictamente político y que hacen a un modelo de gestión del Estado y a un modelo de país, pero tampoco puedo obviar como ex constituyente y como profesional del derecho que estamos haciendo magia, casi ciencia ficción. Estamos sancionando distribución de impuestos que ni siquiera han sido aprobados por quien es Cámara de origen, la Cámara de Diputados. Es público y notorio que hace ya unas cuantas horas se cayó la sesión.

Entonces, debemos tener presente qué es lo que estamos sancionando. No es simplemente una prórroga de un pacto o una medida para apuntar a un déficit, que no estoy tan segura sea coyuntural, como se afirma desde la conducción económica. Temo también vendrán algunas otras medidas, tal vez no previstas. Espero que sean sólo temores. Pero de algo estoy segura: a nadie en el país se le ocurra que al gobierno le vaya mal, pero mucho menos aún a quienes, más allá de las pertenencias partidarias, tenemos la responsabilidad de administrar las provincias. Porque sabemos que una baja en la recaudación fiscal va a impactar decididamente a nuestras propias economías. Así que a aquellos que afirman que por ahí discutimos porque queremos que las cosas vayan mal o porque hay oposición les digo que no es cierto. Creemos que el apoyo a un gobierno pasa fundamentalmente por señalar las cosas que están bien, como nos ha tocado hacerlo también en este recinto y en la práctica concreta. Pero no hay nada mejor para una provincia o para un partido que desempeñar bien la gestión de gobierno, cuidando los intereses a su cargo. Porque en definitiva cuando cuidamos los intereses de los que viven en Santa Cruz, de los que viven en la Patagonia, no nos inspira un sentido de provincialismo ultramontano; lo hacemos en el ejercicio de la responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros.

Estoy segura, absolutamente segura, señor presidente, de que si cada responsable institucional cumpliera acabadamente este rol en todos los ámbitos y en todas las esferas, nos iría mucho mejor, aun cuando duela decir o escuchar determinadas cosas. Pero creo que es importante señalarlas.

Por estas razones, señor presidente, y porque creo que vamos a tener que seguir discutiendo medidas que seguramente van a venir en el futuro, con estos fundamentos — que luego vamos a discutir en particular si es que se continúa con el trámite de la votación — quiero adelantar el

voto negativo para este proyecto de ley por parte de los dos senadores justicialistas por la provincia de Santa Cruz.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — Señor presidente: solicito la inserción de expresiones que pensaba pronunciar sobre este tema.

— Asentimiento.¹

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero, de la Unión Cívica Radical.

Sr. Meneghini. — Señor presidente: voy a ser muy breve y me referiré solamente al aspecto constitucional de esta cuestión, dado que comparto lo expuesto por los oradores que me han precedido en el sentido de que es de poca seriedad referirse a un paquete impositivo que aún no ha sido aprobado por la Cámara de Diputados.

En ese sentido quiero señalar mi profunda preocupación por la violación del artículo 75, inciso 2, y de la cláusula transitoria respectiva contenida en la Constitución sancionada en 1994.

Comparto lo expresado por la señora senadora por la provincia de Santa Cruz en cuanto a que la ley de coparticipación, a la que se le ha asignado un rol constitucional que antes no tenía, es uno de los ejes fundamentales de la reforma de 1994. Creo que los constituyentes buscaron plasmar las bases de un esquema tributario que, persiguiendo objetivos de eficiencia económica y equidad distributiva, propiciara la fijación de un verdadero federalismo tributario, compatible con las recientes políticas de descentralización de funciones.

Creo que el objetivo era el de perfeccionar el esquema del federalismo fiscal imperante en la República, dentro de un escenario de políticas tendientes a profundizar la democracia económica y política.

Sigo creyendo en la necesidad de un nuevo instrumento fiscal que logre, mediante la asignación de competencias, otorgar a la Nación sólo lo necesario, y a las provincias y a los municipios todo lo posible.

No estamos tratando de achicar el Estado nacional sino de redefinirlo, organizando su eficacia en algunas pocas funciones esenciales para concretar el bien común. La reforma misma del

Estado se compromete a sí misma si no estimula realmente la recuperación del federalismo.

Vuelvo a insistir en que los constituyentes de 1994 fueron muy cuidadosos al sancionar las normas y fijar pautas precisas, a las cuales debería ajustarse el dictado de esta nueva ley de coparticipación.

Creo que la idea-fuerza, aun en este modelo, genera su propio equilibrio, a través de la reforma del Estado, al provincializar y municipalizar obras, servicios y gastos públicos para acercarlos al cuerpo social y facilitar el control de gestión. Pero con esta iniciativa del Poder Ejecutivo estamos trabando la legalización o la operatividad de estos principios esbozados en la Constitución. Porque la provincialización y la municipalización de obras, servicios y gastos, exige recursos y gradualidad; no se trata de transferir déficit sino de habilitar a los poderes locales para asumir en plenitud la prestación de servicios públicos. Y esto requiere tiempo, que estamos restando con esta postergación.

Asimismo, quiero poner de manifiesto y resaltar que la cláusula transitoria sexta dispone claramente que no podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigentes a la sanción de la reforma constitucional. Consideramos que cualquier modificación de los criterios de distribución, como el que quiere instrumentarse, es inconstitucional. La reforma de 1994 desarrolló el tema y le dio carácter constitucional. Cada párrafo y su correspondiente interpretación fue producto de arduos debates. La letra escrita indica con claridad el camino; no hay puntos oscuros. No es la falta de claridad lo que compromete el debate, sino la resistencia a resignar recursos, resignación sin la cual no puede consolidarse el sistema actual.

Finalmente, deseo señalar que en la iniciativa del Poder Ejecutivo también existe una clara violación a la ley de presupuesto. Hemos avanzado bastante con el envío a tiempo de los presupuestos al Congreso de la Nación para su tratamiento. Pero no sólo se deben enviar en término sino que deben cumplirse. Evidentemente, una de las razones que dieron origen a esta propuesta impositiva es que no se ha cumplido el presupuesto, a pesar de que no se lo dice en la exposición de motivos remitida. No obstante, me pregunto qué pasaría en un país serio —por ejemplo, en uno del Primer Mundo, al que queremos ingresar—, con aquellos funcionarios que llegaron al mes de septiembre y se encontraron sin recursos para continuar ejecutando el presu-

¹ Ver el Apéndice.

puesto. Indudablemente, deberían estar sentados en este recinto los responsables de esa situación.

No podemos acompañar con nuestro voto esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Estamos postergando el tratamiento de una de las herramientas fundamentales que tienen las provincias para proteger sus legítimos intereses, para definir el rol de país y para restablecer los equilibrios inexistentes como consecuencia de recursos asignados en forma desigual y que han quebrado la integridad nacional que debemos perseguir.

Por las razones que hemos expuesto, vamos a votar en contra de este proyecto. Al mismo tiempo, voy a hacer una recomendación: debemos dejar de trabajar para la coyuntura y nos tenemos que abocar a tratar con seriedad los problemas de la gente, que son de larga data, para encontrar soluciones permanentes.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos de la Unión Cívica Radical.

Sr. López. — Señor presidente: en esta última parte de la sesión hemos escuchado algunos argumentos que nos han llevado a solicitar el uso de la palabra para hacer algunos agregados.

Hemos escuchado dos discursos a los que adhiero porque han sido hechos con profundo sentido de responsabilidad en cuanto a lo que se está tratando en el Senado de la Nación. Me refiero a los discursos de los señores senadores Leopoldo Moreau y Cristina Fernández de Kirchner. Lamentablemente, este último fue escuchado sólo por dos miembros de su bancada. Parecía que habían abandonado el recinto, pero ahora están volviendo.

No quiero ser reiterativo en el problema constitucional planteado ya profundamente por los senadores que me han precedido en el uso de la palabra, sobre todo en lo que se refiere al artículo 75 y a la cláusula transitoria sexta. Simplemente, quiero agregar a los argumentos ya vertidos que no hay pacto, que no hay acuerdo. Esta es una ley acuerdo y se presupone que fue suscrita previamente por los gobernadores provinciales. El artículo 75, inciso 2, hace referencia en dos de sus párrafos a esta cuestión. Surge de este artículo que el acuerdo con las provincias es preexistente al tratamiento del proyecto de ley en el Congreso de la Nación. En efecto, el segundo párrafo de este inciso 2 dice lo siguiente. “Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias [es decir, está presuponiendo que el acuerdo entre la Nación y las provincias es preexistente], instituirá regímenes de coparticipación de estas con-

tribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos”. Un poco más adelante expresa que “la ley convenio tendrá como Cámara de origen al Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada...”. En el párrafo siguiente señala que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”.

Reitero que este artículo de la Constitución Nacional está indicando que el acuerdo entre la Nación y las provincias es preexistente al tratamiento de un proyecto de ley de esta naturaleza en el Congreso de la Nación. Pero en este caso no hay acuerdo porque muchísimos gobiernos de provincia —o varios de ellos, por lo menos— todavía no han suscrito la prórroga del Pacto Federal que estamos tratando. Es decir, estamos tan apurados por hacer bien los deberes que no solamente estamos dejando de lado esa estrategia parlamentaria que se había calificado como muy buena para evitar que haya vetos o modificaciones —lo cual fue motivo de análisis por el periodismo de la Nación hace dos o tres semanas— y que fracasó rotundamente. En efecto, la sesión de la Cámara de Diputados se levantó porque no hubo quórum. Pero debo señalar que no solamente no concurrieron los diputados de partidos de la oposición sino que tampoco lo hicieron algunos diputados tucumanos, mendo-cinos, santacruceños, además de otros diputados del oficialismo.

Como nosotros no somos ingenuos, suponemos que no se trata de la simple no concurrencia a la sesión sino que detrás de esto hay una renegociación. Cuando me enteré de esta circunstancia y empecé a averiguar al respecto me dijeron que había gobernadores de provincia con sus equipos económicos en el Ministerio de Economía para introducir modificaciones a los dictámenes que habían aprobado ayer las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados de la Nación.

O sea que lo que decía el señor senador Moreau es real. La semana que viene nos vamos a encontrar con que la suma que distribuimos no la tenemos. Además, ni siquiera vamos a distribuirla con alícuotas porque está establecido que algunas sumas sean fijas. Dice “tantos millones de pesos para tal cosa, tantos millones de pesos para tal otra”. De tal manera que cualquier modificación que se introduzca puede hacer caer este proyecto que estamos tratando ahora.

No deseo repetir un argumento, pero les digo que esta cláusula transitoria Sexta no solamente implica una inconstitucionalidad por el hecho de que no vamos a tener aprobado el régimen de coparticipación que debería ser sancionado antes del 31 de diciembre de este año, sino porque —según lo que dice esta cláusula Sexta— la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada. No hay aprobación ni acuerdo previo de gobernadores de provincias suscripto al momento en que estamos tratando este proyecto de ley.

Yo no sé cómo estará el gobernador de mi provincia, quien no firmó el Pacto cuando se hizo la reunión de Olivos. Dijo que lo haría cuando la Comisión de Presupuesto emitiera dictamen. Ya emitió dictamen pero éste cayó. Se está discutiendo en el Ministerio de Economía de la Nación.

Sr. Maya. — Para tranquilizarlo, quiero decirle que ya está de acuerdo.

Sr. Presidente. — No interrumpa al senador que está en uso de la palabra.

Sr. López. — No hay inconveniente. No estoy en ningún tema menor, por otra parte.

No voy a hacer referencia a que tampoco hay déficit fiscal cierto, porque ya lo dijeron otros oradores y a ellos me remito.

Tampoco voy a hacer referencia a que los incrementos a crearse fracasaron por caer la sesión en Diputados y a que la estrategia legislativa también fracasó, por más inteligentemente que fuera pergeñada. Pero digo que esto hace pagar exclusivamente al Senado de la Nación el costo político de modificar el régimen de coparticipación. Porque si se hubiera seguido el trámite, hubiésemos podido decir que había una estrategia legislativa vinculada con el tratamiento en el Senado, con todas estas irregularidades, pero que hubiera permitido que avanzáramos en el tema. Pero en los diarios de mañana, los representantes de cada provincia seremos los que pagaremos el costo político frente a la opinión pública de cada una de ellas con relación a modificar el régimen coparticipable sin acuerdo y sin la sanción del régimen tributario por parte de la Cámara de Diputados.

Las palabras del señor senador Moreau no fueron tomadas como una moción pero las recojo para plantearlas en ese sentido. Por otra parte, veo que el oficialismo tampoco tiene mucho interés en seguir con el tratamiento de este tema. Por lo tanto, formulo la moción de orden de que

se postergue el tratamiento de este asunto hasta que haya acuerdo firmado por los gobernadores de provincia y hasta que la Cámara de Diputados de la Nación avance en su tratamiento con un dictamen consensuado por los gobiernos provinciales y por la mayoría legislativa de este Parlamento.

Sr. Presidente. — ¿Le parece bien al señor senador que postergue la votación hasta que haya quórum y continúe el señor senador por Catamarca haciendo uso de la palabra?

Sr. López. — Sí.

Sr. Presidente. — Desde el punto de vista reglamentario, usted puede exigirme que llame para votar, pero si a usted le parece bien...

Sr. López. — ¿Cuántos oradores faltan, señor presidente?

Sr. Presidente. — Solamente uno: el señor senador Villarroel.

Sr. López. — Accedo.

Sr. Presidente. — Cuando haya quórum, haré votar en primer término su moción de orden.

—Se llama para votar.

Sr. Yoma. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Villarroel. — Cómo no.

Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: es para aclarar lo que creo una confusión del señor senador por Entre Ríos. Cuando en la cláusula transitoria Sexta la Constitución se refiere a la adhesión de las provincias, alude a la adhesión que va a verificarse con el voto de las Legislaturas provinciales y no con el acuerdo de los gobernadores.

Lo único que la Constitución establece como condición respecto de este tipo de regímenes es la iniciativa del Senado. La adhesión de las provincias se va a verificar con posterioridad a la sanción de la ley convenio o a la prórroga de este pacto fiscal, cuando las respectivas provincias adhieran a la norma que estamos sancionando. En ningún artículo o párrafo de la Constitución se habla de la firma de los gobernadores de provincia.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. López. — He sido aludido, por lo que deseo hacer uso de la palabra.

Sr. Presidente. — Cómo no, señor senador.

Sr. López. — Señor presidente: creo que no es tal como dice el señor senador por La Rioja. Se

desprende de los textos que he leído que el acuerdo es previo. Las Legislaturas provinciales podrán aprobar después lo que suscribieron sus gobernadores. Pero para el tratamiento en el Congreso, el acuerdo es previo y surge del inciso 2° del artículo 75 y de la cláusula transitoria Sexta. Los párrafos de este artículo que he citado se refieren claramente a un acuerdo previo a la sanción del Senado de la Nación.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente, señores senadores: como no se necesita ser muy perspicaz para advertir la inutilidad de un discurso a esta altura del debate y dado a cómo se han ido sucediendo los acontecimientos, voy a ahorrar a la Cámara lo que ya sería una pérdida de tiempo. *(Risas.)*

Simplemente, voy a decir un par de cosas, quizás obligatorias, porque me veo en el trance —por circunstancias que todos imaginarán— de emitir un voto que no se adecua, precisamente, a mis convicciones.

Me siento absolutamente representado por las objeciones constitucionales que, en primer lugar, ha manifestado el señor senador por Mendoza del radicalismo, seguidas por las de otros oradores en ese mismo sentido; por el inventario bastante lamentable realizado por el señor senador por Salta —y eso que ha sido bastante benévolo— respecto de los plurales incumplimientos de la Nación para con las provincias; por las reflexiones puntuales que han hecho en su momento los dos señores senadores por Corrientes —quienes en definitiva van a adoptar la postura que por mi parte voy a adelantar—; y por el discurso de la señora senadora por Santa Cruz, que ha mostrado claramente cuál es la promesa y expectativa fallida de la reforma constitucional. Tengo para mí que la búsqueda de los consensos para esa reforma es una de las razones importantes de la situación económica en que nos encontramos.

Quiero apuntar que no hace mucho tiempo —en este año— en este mismo recinto, ante alguna observación sobre el tema, escuchamos a destacados representantes del oficialismo decir que el monto del déficit no nos debía preocupar en absoluto porque era inferior al 3 por ciento del producto bruto interno. De manera que, según dijeron en ese momento, si fuéramos un país europeo estaríamos en condiciones de ingresar a la Comunidad Económica Europea pues cumplíamos las pautas mínimas de Maastricht. Sin embargo, ahora resulta que el déficit obliga

al gobierno a producir un ajuste realmente cruel y drástico que, como de costumbre, es a costa de los más débiles; y en este caso concreto, a través de los pactos fiscales en aras de las debilidades de las provincias.

Haciendo honor a mis convicciones podría dar un rotundo “no” en general y también en particular a este proyecto. Pero como no cae sobre mis espaldas la responsabilidad de pagar los sueldos y atender las obligaciones de mi provincia, sino sobre las de las autoridades de Catamarca, considero que debo subordinar mis propias razones a las necesidades inmediatas de la provincia a la que represento, con cuyas autoridades desde luego he estado en contacto fluido en las últimas horas y para las cuales, en general, esta iniciativa soluciona algunos problemas urgentes, aunque no sean los más importantes. Aún a costa de la ortodoxia constitucional, de la verdadera justicia y de la historia de los incumplimientos de la Nación para con nosotros, me veo en el trance de adelantar mi voto afirmativo en general, que como he dicho... *(Aplausos.)*

Me parece que el aplauso está bien pero más allá de que tenga alguna intención amable me suena a frívolo y en realidad doloroso para nuestra provincia. Y si tiene un dejo de alguna sorna...

Varios señores senadores. — ¡No!

Sr. Villarroel. — ..., lo lamentaría porque siempre he respetado las opiniones ajenas, aún las mal dichas, y, en definitiva, porque precisamente este recinto, que debe ser el recinto del federalismo dado que la Constitución —más allá de los cambios— sigue diciendo que los senadores son de las provincias, en muchos casos se convierte en caja de resonancia de posturas partidarias, lo que considero que es un contrasentido y —en mi modesta opinión— uno de los errores de la reforma.

Digo entonces que en orden a esas circunstancias, cuyas responsabilidades cargan sobre sus espaldas las autoridades de mi provincia y no sobre la mía, debo adelantar el voto afirmativo en general, que como he dicho en una circunstancia análoga, si cupiera, debería dejar consignado como voto afirmativo en general bajo protesta.

Sr. Presidente. — Señor senador: estoy seguro de que todos los senadores tienen un profundo respeto por usted y que el aplauso estuvo vinculado más a la suma de un voto que a una falta de respeto.

Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Señor presidente, señores senadores: al término de este debate diré pocas palabras para justificar el sentido de mi voto.

Ejerczo la representación de la provincia del Neuquén, una provincia gobernada por el Movimiento Popular Neuquino desde hace más de treinta años, cuyos miembros siempre decimos que nos mantenemos fieles a la tradición del origen peronista que motivó su fundación, pero que la hemos modernizado y sostenido doctrinariamente, no solamente mediante los principios de la justicia social, sino a través de los principios fundamentales del federalismo.

En defensa de esos principios federales sostenemos la necesidad de que se respete, entonces, en plenitud el sistema constitucional de la coparticipación de impuestos; que ésta sea plena: que abarque a todos los impuestos, salvo a los que tengan una asignación específica.

Como integrante de una provincia de la región patagónica, debo manifestar que en este momento nuestra región produce el 70 por ciento de petróleo y el 90 por ciento del gas que se consumen en el país, de manera que la Patagonia está contribuyendo al desarrollo nacional en una proporción altamente significativa.

Este sistema que se instaura mediante la continuidad del Pacto Fiscal II es recesivo para los intereses de nuestra provincia y de la región patagónica. Me veo, entonces, sometido a la contradicción que ha señalado el señor senador por Catamarca, al remarcar de qué manera estos principios se encuentran tal vez en colisión con lo que va a resolver la mayoría parlamentaria del Senado de la Nación; también de qué manera estos principios no están de acuerdo con algunas necesidades importantes del país, como la concentración de recursos para atender la gran deuda externa nacional.

Yo voy a votar por la afirmativa pero quiero dejar sentado el sentido de mi voto y la esperanza de que el desarrollo de la economía mediante fuentes productivas de trabajo, contribuya a modificar esta situación y para que armoniosamente nuestra región pueda estar a la altura económica que la riqueza de sus circunstancias naturales y la grandeza de su pueblo merece.

Sr. Presidente. — Antes de conceder la palabra al último orador, corresponde reglamentariamente someter a votación una moción de orden formulada desde el bloque radical por el señor senador por Entre Ríos, de que este tema pase para la próxima sesión, ¿verdad?

Sr. López. — Así es, señor presidente; hasta que haya acuerdo previo de las provincias y hasta que la Cámara de Diputados sancione el paquete fiscal que tiene en consideración.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—La votación resulta negativa.

Sr. Presidente. — Queda rechazada la moción.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: muy brevemente deseo hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, quiero dejar sentado que el esfuerzo que hacen las provincias para con la Nación es, exclusivamente, a los fines de sostener el sistema de jubilaciones y pensiones que es responsabilidad de todos los argentinos.

Además, en el caso de la provincia de Mendoza, al cual se refería al señor senador presidente del bloque radical, ésta transfirió su caja a la Nación, y esos recursos, de alguna manera, también están vinculados al sostenimiento de ese sistema que evidentemente hoy tiene problemas y, reitero, es responsabilidad de todos los argentinos.

Quiero dejar aclarado también, señor presidente, que no es cierto que en este pacto, en esta ley que hoy votamos con forma de Pacto, hayamos dejado de lado el piso. Por el contrario, lo hemos aumentado en aproximadamente más de 100 millones. Estamos hablando de 820 u 830 millones, mientras el Pacto anterior garantizaba 740.

De todas maneras no se nos escapa —y lo debemos decir— que este gobierno se ve en la necesidad de atender situaciones que, tal vez, son el resultado de efectos no deseados de una política que asumió con toda responsabilidad y que está dispuesto, con los beneficios que se han obtenido, a continuar, superando los efectos no deseados que tiene el programa o la legislación económica que ha planeado este gobierno de la Argentina.

Este esfuerzo que las provincias hacen, y que se pone de manifiesto en esta institución que es absolutamente federal, tiene un solo destino y una sola responsabilidad: atender a todos aquellos señores y señoras argentinos que han brindado toda su vida al trabajo.

En estos momentos, el sistema que debe asistirlos se encuentra en dificultades.

Nosotros no solamente reconocemos la situación, sino que además estamos totalmente cons-

cientes de que este esfuerzo tiene un solo destino, que es el Sistema de Jubilaciones y Pensiones, que debe atender la situación de un gran número de argentinos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Mac Karthy. — Señor presidente: voy a leer unas declaraciones del gobernador de mi provincia, el doctor Carlos Maestro que, como todos ustedes saben, es de la Unión Cívica Radical. Estuvo reunido con el ministro Corach el presidente del bloque justicialista de diputados, Matzkin.

“Durante dos horas y media —dice Maestro— se analizó el nuevo paquete fiscal, llegándose, en principio, a un acuerdo que contemplaría, al menos en cierta medida, las expectativas de los estados provinciales”. Según dijo Maestro: “Este acuerdo, que deberá ser instrumentado por el Congreso nacional, no sólo implicará un acto de justicia para con las provincias sino que también daría cuenta del aporte y la contribución de las provincias gobernadas por el radicalismo a las necesidades fiscales del gobierno nacional, atento a la compleja situación que es de público conocimiento”. Por supuesto, nosotros mucho agradecemos...

Sr. Genoud. — La necesidad financiera tiene cara de ereje.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. — Por favor, no dialoguen.

Sr. Mac Karthy. — Además dice que de esta manera el estado chubutense habrá de recibir un millón de pesos adicionales, por coparticipación en el impuesto a las ganancias y los bienes personales.

Sr. Maya. — Maestros hay muchos. *(Risas.)*

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se han registrado 42 votos por la afirmativa. Ha resultado aprobado.

En consideración en particular.

—Se enuncia el artículo 1º.

Sr. Usandizaga. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Usandizaga. — Señor presidente: aclaro que he votado por la negativa en la votación en general, pero voy a votar por la afirmativa el artículo 1º. Quiero explicar el sentido de mi voto.

Los santafesinos saben que siempre estuve en contra de los pactos fiscales. Así lo he expresado, incluso durante dos campañas electorales, cuando fui candidato a gobernador, en 1991 y en 1995. Creía que estos pactos fiscales —reitero que yo lo decía durante esas campañas— significaban un avance de la Nación sobre las provincias y que éstas, de alguna manera, al aceptar esta imposición por parte de la Nación estaban resignando un poco la defensa de las autonomías provinciales y, sobre todo, de un principio que, por lo menos, creo que a todos nos es caro, que es el principio del federalismo.

¿Por qué mi voto afirmativo? Porque yo represento a la provincia de Santa Fe y, por supuesto, tengo la necesidad de consultar a quienes hoy manejan los destinos de la provincia sobre la conveniencia de la prórroga de este pacto fiscal.

No es que yo acepte intrusiones de los gobernantes de la provincia de Santa Fe, porque, por supuesto discuto sobre el tema y me tienen que convencer; tienen que argumentar para que yo acepte votar de la forma que ellos sugieren.

Pero, realmente, el ministro de Hacienda de la provincia me ha dicho que necesita imperiosamente de esta prórroga para poder cumplir con las obligaciones que le impone el pacto fiscal desde el punto de vista tributario, que es la eliminación de Ingresos Brutos y de la ley de sellos. Lo cierto es que la provincia todavía no está en condiciones de buscar una solución alternativa desde el punto de vista fiscal.

En definitiva, brevemente, me han parecido razonables estas argumentaciones del ministro de Hacienda. Por ahí vendría mi voto favorable a este artículo 1º que prorroga el pacto fiscal.

Pero quiero aclarar —y lo digo públicamente— que le dije al ministro Garnero lo siguiente: ministro, si la prórroga de este pacto fiscal está condicionada a que también se prorrogue o se postergue la discusión de la nueva ley de coparticipación, lamentablemente usted exímame del compromiso de votar esta prórroga porque yo creo que es de imperiosa necesidad que se discuta la nueva ley de coparticipación; que se cumpla con la Constitución y que, de alguna manera, las provincias traten de recuperar lo que han perdido a través de los pactos fiscales y de una serie de leyes en las cuales han ido cediendo parte de sus recursos.

La respuesta que me ha dado el ministro Garnero —y no tengo por qué dudar de su palabra hasta que no compruebe lo contrario— es que Santa Fe, de ninguna manera ha renunciado a seguir discutiendo la ley de coparticipación. que

está trabajando en ese tema; que está buscando los caminos más racionales para lograr la posibilidad de un acuerdo que permita lograr la sanción de esa ley.

Queda claro que estoy en contra del pacto fiscal. Me ha convencido el gobierno de la provincia —que es el que maneja los destinos de Santa Fe— de que necesita de esta prórroga fiscal y, además, me han prometido que Santa Fe, por lo menos, va a discutir sobre la sanción de una nueva ley de coparticipación.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 1º.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Ha resultado aprobado por 43 votos a favor y 12 en contra.

—Se enuncia el artículo 2º.

Sr. Verna. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Verna. — Señor presidente: solicito que por Secretaría se dé lectura porque hay modificaciones con respecto al dictamen.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura al artículo 2º, con las modificaciones introducidas.

Sr. Prosecretario (Pontaquarto). — “Artículo 2º: Se asignará al financiamiento del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, hasta el 31 de diciembre de 1998:

a) El 21 % de lo que se recaude por la aplicación de los gravámenes específicos a las naftas, gasolina natural, solvente, aguarrás y a los productos compuestos por una mezcla de hidrocarburos, en la medida que califiquen como naftas de acuerdo a las especificaciones técnicas de la reglamentación respectiva; b) El producido de impuestos que graven, en forma específica, el gas oil, diésel oil, kerosene y el gas natural comprimido.

El setenta y nueve por ciento (79 %) restante de la recaudación de los impuestos a que hace referencia el inciso a), se distribuirá de conformidad a lo previsto en el artículo 18 del Título III, Capítulo IV, de la Ley 23.966 y sus modificaciones.

Las asignaciones previstas en el presente artículo se efectuarán, en su caso, a partir del día en que se hagan efectivos los incrementos del impuesto para los productos ya alcanzados por el tributo y, para los productos del inciso b), en su caso, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la norma que disponga su gravabilidad.”

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 2º.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Ha resultado aprobado por 41 votos a favor.

—Se enuncia y aprueba el artículo 3º.

Sr. Presidente. — Ha resultado aprobado por 40 votos a favor.

—Se enuncia el artículo 4º.

Sr. Verna. — Pido que se lea.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Pontaquarto). — (*Lee*) “Artículo 4º: Suspéndese desde el primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial y hasta el 31 de diciembre de 1998, la aplicación de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 30 del Título VI de la ley 23.966 y sus modificaciones para el Impuesto a los Bienes Personales.

”Durante el período mencionado, los fondos recaudados a que se refiere el citado inciso se distribuirán de conformidad con lo dispuesto en el régimen de coparticipación de la ley 23.548, incluyéndose a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur según las disposiciones vigentes”.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Verna. — Señor presidente: en el segundo párrafo, donde dice: “...a que se refiere el citado inciso...”, debe continuar diciendo: “se distribuirán según las proporciones establecidas en los artículos 3º y 4º de la Ley 23.548...”, continuando luego el artículo tal como está redactado.

El propósito de esta modificación es que no se haga la detracción previa del 15 por ciento de la masa coparticipable.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º con la modificación propuesta por el presidente de la comisión.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — El artículo ha resultado aprobado por 43 votos a favor.

Sr. Verna. — Solicito que por Secretaría se le dé lectura al nuevo artículo 5º que proponemos.

Sr. Gagliardi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Gagliardi. — Señor presidente: anteriormente quise fundamentar mi voto positivo en razón de la brillante exposición del señor presidente de mi bloque, la Unión Cívica Radical, que comparto total y absolutamente.

Quiero decirles simplemente que he votado afirmativamente por sugerencia u orden del gobernador de mi provincia. En el futuro, antes de votar una ley como ésta, me corto la mano.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Pontaquarto). — (*Lee.*) “Artículo 5º: Desde el primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial y hasta el 31 de diciembre de 1998, ambas fechas inclusive, el destino del producido del impuesto a las ganancias, establecido en el primer artículo incorporado a continuación del artículo 102 de la ley de dicho tributo, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, se hará efectivo con la previa detracción de la suma de quinientos ochenta millones de pesos (\$ 580.000.000) anuales, cuyo destino será el siguiente: a) La suma de ciento veinte millones de pesos (\$ 120.000.000) anuales para el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. b) La suma de veinte millones de pesos (\$ 20.000.000) anuales para refuerzo de la Cuenta Especial 550 - ‘Fondo de Aportes del Tesoro nacional a las Provincias’; c) La suma de cuatrocientos cuarenta millones de pesos (\$ 440.000.000) anuales al conjunto de las provincias y para distribuir entre ellas según las proporciones establecidas en los artículos 3º y 4º de la ley 23.548, incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur conforme a las disposiciones vigentes.

“Las sumas que correspondan a las provincias en virtud de lo dispuesto en el presente artículo les serán liquidadas mensualmente en la proporción correspondiente.”

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Verna. — Señor presidente: quiero hacer una corrección.

Donde dice: “en los artículos 3º y 4º”, debe decir: “en los artículos 3º inciso c) y 4º de la ley 23.548”. Propongo esto ya que el artículo 3º inciso c) de la ley es el que fija la distribución entre las jurisdicciones provinciales.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba, del Partido Justicialista.

Sr. de la Sota. — Señor presidente: es al solo efecto de formular una aclaración.

En el día de la fecha el bloque de diputados del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba se entrevistó a mi pedido con el señor gobernador Ramón Bautista Mestre para consultarle su opinión sobre el proyecto de ley que tenemos a consideración.

El señor gobernador les hizo saber que el gobierno que él encabeza en Córdoba asignaba especial importancia a que el reparto de la suma de los 440 millones de pesos que va a recibir el conjunto de las provincias en virtud de este tributo fuera coparticipado en el marco de los artículos 3º y 4º de la ley 23.548, como aquí se establece.

Asimismo, el señor gobernador de Córdoba les hizo saber a los diputados del Partido Justicialista de mi provincia que estimaba muy beneficioso que esta suma fuera liquidada mensualmente en la proporción que corresponde.

Ambos pedidos se encuentran satisfechos en el presente proyecto de ley lo que, no cabe duda, hará que el gobierno del radicalismo de la provincia de Córdoba esté de acuerdo con su sanción.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza, Unión Cívica Radical.

Sr. Genoud. — Señor presidente: como en este nuevo texto hay una sugerencia que formuló oportunamente el senador Moreau de nuestro bloque, y que entendemos mejora notablemente su tenor, el bloque radical va a votarlo afirmativamente. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 5º por cuarenta y nueve votos afirmativos y tres votos negativos.

Debo dejar aclarado, para que quede constancia en el acta, que la señora senadora por Santa Cruz se levantó luego de la votación. Por eso cuento los votos sobre cincuenta y dos y no sobre cincuenta y uno.

Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Moreau. — Señor presidente: tal como adelantamos en nuestra exposición, donde fundamentamos nuestro voto negativo en general, por lo menos el de algunos senadores del radicalismo —cada uno individualmente, como el caso de los senadores por Santa Fe, por Mendoza y quien habla que lo expresamos con nuestros fundamentos—, el hecho de constituir este cuerpo

federal que es el Senado nos llevó a sugerir a la comisión la incorporación de un artículo, el 6º, cuya redacción sería la siguiente.

Sr. Presidente. — Obra en Secretaría. Si usted quiere, se le dará lectura.

Sr. Moreau. — Cómo no.

Sr. Presidente. — Por Secretaría entonces se dará lectura al artículo 6º.

Sr. Prosecretario (Pontaquarto). — (*Lee.*) "Artículo 6º: Las sumas destinadas a las provincias de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 4º y 5º, deberán ser giradas por la Nación independientemente de la garantía mínima de coparticipación establecida en el Pacto Federal del 12 de agosto de 1992 y en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993."

Sr. Moreau. — Va de suyo, señor presidente, que este artículo tiene como objetivo garantizar aún más a las provincias que, efectivamente, no van a tener ninguna sorpresa en lo que se refiere a la distribución de los recursos que aquí se les asigna a cada una de ellas.

Sr. Alasino. — El gobernador Duhalde se lo va a agradecer.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Verna. — Vamos a aceptar la propuesta. Se trata de una redacción que hemos consensuado en la comisión con el senador Moreau y, por lo tanto, vamos a incorporarla al dictamen.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el nuevo artículo 6º.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo por cincuenta y un votos a favor y dos votos negativos.

— El artículo 7º, ex 5º, es de forma.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley.¹ Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

— Mientras abandonan sus bancas y se retiran del recinto varios señores senadores:

Sr. Presidente. — Habida cuenta de la voluntad manifiesta en el recinto, queda levantada la sesión.

— Son las 23 y 29.

MARIO A. BALLESTER.

Director del Cuerpo de Taquígrafos.

12

APÉNDICE

I

SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

1

Homenaje a la memoria del doctor Ricardo Balbín

— El texto de la resolución aprobada es el que figura en la página 4992.

2

Homenaje al Día del Maestro

— El texto de la resolución aprobada es el que figura en la página 5024.

3

Competencia del Senado como tribunal de juicio político

— El texto de la resolución aprobada es el siguiente:

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1º — Constituirse en Tribunal en el día de la fecha, previo juramento de sus miembros, para conocer

del juicio político al señor juez titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 25, doctor Francisco Miguel Angel Trovato, en virtud de la declaración de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de hacer lugar a la formación de causa, de conformidad con lo que establece la disposición transitoria decimocuarta de la Constitución Nacional, concordante con la plena vigencia del sistema republicano.

Art. 2º — Dar cuenta al Poder Ejecutivo nacional, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

4

Resolución aprobada en sesión secreta

— El texto de la resolución aprobada es el que figura en la página 5043.

¹ Ver el Apéndice.